

AUTODESARROLLO

Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo

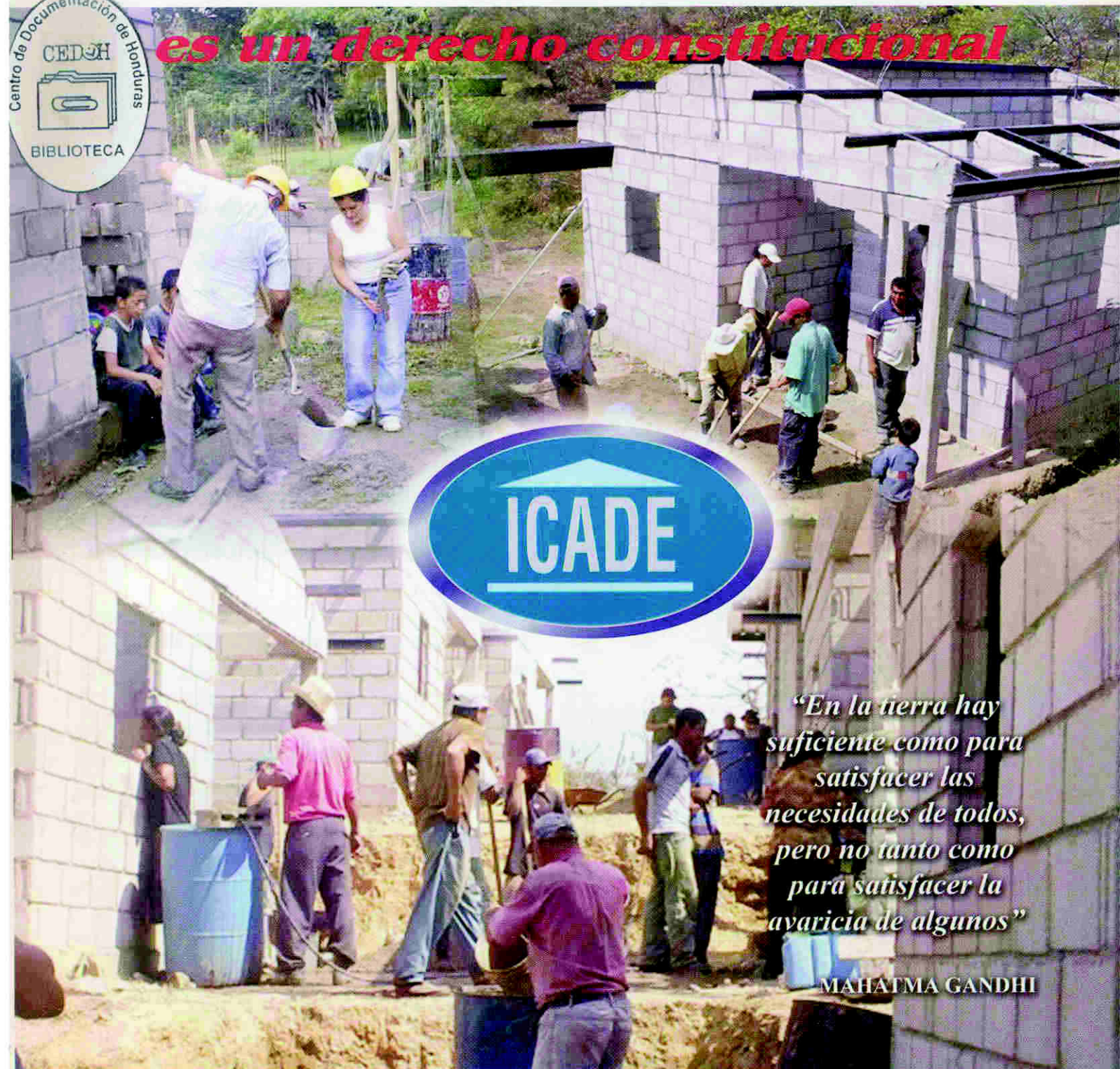
La vivienda social digna

es un derecho constitucional



“En la tierra hay suficiente como para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos”

MAHATMA GANDHI





La casita de Pablo



ALFONSO GUILLÉN ZELAYA

La casita de Pablo era blanca y tendida como un ala en el mar: y en las grandes mareas semejaba una vida que por miedo al naufragio se pusiera a rezar.

La casita de Pablo siempre estuvo vestida de bejucos del monte y en flor; era el altar donde el sol y los pájaros en cada amanecida celebraban la misa primera del lugar.

La casita de Pablo después quedó desierta, sin misas y sin flores ¿cómo una cosa muerta? De Pablo ahora dicen que yerra sin parar;

y del espacio humilde, donde hiciera su nido, que perduran apenas, impidiendo el olvido, cuatro postes rebeldes a los golpes del mar.

*Alfonso Guillen Zelaya
Hondureño
(1887 - 1947)*



INDICE

Carta del Director.....	3
“La vivienda es un derecho, no una mercancía”, <i>Gustavo González</i>	5
Resumen histórico del problema de la vivienda en Honduras.....	7
La “locura” solidaria de la vivienda digna.....	15
Una estrategia de reducción a la pobreza...sin techo.....	18
En 35mts ² no caben los sueños.....	23
“Ahorita estamos viviendo en la casa de una tía, ahí vivimos todos, mis cuatro hijos y mi esposa”.....	24
Una cooperativa con manos limpias y futuro claro.....	25
Un maestro de obra que enseña construyendo.....	27
<i>Cohvisol y Provisol</i> : cronología básica de la incidencia en el 2006.....	29
<i>Lecciones prácticas</i> : 10 ventajas de los programas de “vivienda social.....	31
Quién es quién en el sector público en materia de vivienda.....	35
La demanda ciudadana: menos promesas oficiales y más techos.....	36
Testimonios de prensa.....	38



© **Revista Autodesarrollo**
Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo (ICADE)

Presidente Junta Directiva del ICADE
Alcides Andrade

Director Ejecutivo
Leónidas Ávila Chávez

Producción:
Audiovisuales y Análisis de Prensa

Asesoría:
Leónidas Ávila Chávez
Luis Enrique Trundle Fagoth

Fotografías:
Carlos Turcios

Diseño y diagramación:
Raúl Torres S.

Impresión offset:
Ediciones Guardabarranco

Dirección del ICADE:

Oficina principal: Tegucigalpa, Apdo. Postal 4079, Tels: 222-3435, 238-7060, 237-7349, 222-1155, Fax: 238-7080,
E-mail: icade@sdnhon.org.hn

Se autoriza la reproducción total o parcial de esta revista por cualquier medio impreso, reconociendo los créditos del ICADE

Impreso y hecho en Honduras.



Carta del Director

Tiene usted en sus manos un nuevo número de la Revista Autodesarrollo. El ICADE no publica esta revista con plazos fijos sino que lo hace cuando tiene algo que decir, y en esta ocasión queremos informar de nuestra experiencia institucional en el campo de la vivienda social, donde encaramos el desafío de contribuir a resolver uno de los problemas estructurales más complejos y sentidos de nuestra sociedad.

A lo largo de estas páginas demostramos que sí es posible construir viviendas para los pobres, con la participación protagónica de los pobres, los gobiernos locales, el gobierno central y la cooperación internacional.

El reto no es de poca monta. Se trata de romper una estructura de poder que aprovecha los recursos del Estado para hacer negocios a su favor. Lo que estamos construyendo no son únicamente viviendas, sino una política pública distinta, con una visión participativa y democrática. Para nosotros, en el ICADE, ese enfoque implica una forma diferente de asumir las cosas. Por ejemplo, trascender el proyectismo y reclamar al Estado el derecho de las mayorías a vivir bajo condiciones dignas, rompiendo la lógica del lucro, asumiendo una nueva responsabilidad social, y eso se logra a través de la incidencia política y la participación ciudadana activa.

A tono con el desafío, en el ICADE revisamos también nuestro propio accionar, porque trascender lo puntual exige una estrategia que demanda cambiar el papel tradicional de las ONGs. Es la búsqueda de otro equilibrio. Luchar por un derecho ciudadano no basta; tenemos que ofrecer ejemplos concretos del cambio y la propuesta. La idea es que sin una fuerza social grande no se pueden lograr alcances mayores.

Si todo el trabajo del ICADE se limita a construir viviendas, equivale como a meternos dentro de ellas, reducirnos a sus cuatro paredes, y las conquistas serán limitadas. Por eso se fundó COHVISOL, para preparar los cuadros del sector popular, y que alrededor de una reivindicación se articule un movimiento social de connotaciones políticas.

ICADE se las juega para sentar un precedente. Nuestra meta es construir una base social con un pensamiento de largo plazo, sentando ejemplos - como las viviendas en Veracruz o en El Paraíso- asumiendo modalidades distintas de respuesta y exigiendo una actitud más responsable de las autoridades públicas.

Este año, a través del COHVISOL, hemos alcanzado acuerdos concretos con el Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, y estamos atentos a que los compromisos se cumplan. Nosotros le vemos voluntad política a "Mel" Zelaya, pero preocupa que esa voluntad no se traduzca en una articulación efectiva con su gabinete de gobierno. Es más, sentimos que hay intereses de grandes empresarios dentro del propio gobierno que conspiran contra esa voluntad, y a quienes no les gusta escuchar de programas a favor de la vivienda solidaria. La fuente original del capital de muchos está en los recursos del Estado; por eso se resisten y cuando pueden sabotear, lo hacen.

A eso estamos enfrentados, y no nos engañamos. Para nosotros, las ONGs están obligadas a asumir retos que van más allá de la justificación de su sobrevivencia. Las ONG existen porque las justifica la pobreza social, pero esa pobreza debe ser combatida hasta erradicarse. Sería muy triste que las ONGs subsistan a largo plazo porque hayan fracasado en su lucha contra la pobreza. En esa perspectiva, llegará un momento en que COHVISOL siga adelante por sí solo, con el ICADE como acompañante, pero en búsqueda de otros procesos que respaldar.

Para el 2007 queremos dar otros pasos hacia delante. Por ejemplo, que se apruebe una política nacional de tierras para viviendas y concertar una ley marco donde se refleje la voluntad del Estado para con las familias empobrecidas.

Como ven, estimados lectores: tenemos mucho que hacer, y necesitamos su apoyo. Eso es lo que deseamos incentivar a través de estas páginas. Las puertas del ICADE están abiertas. Pase adelante.

LEONIDAS AVILA CHÁVEZ
Director del ICADE

Una lucha que trascendió las fronteras



English - Español - Français

Habitat
International
Coalition

News & articles

El Instituto para la Cooperación y AutoDesarrollo (ICADE) ha estado implementando una importante acción de incidencia a través del COHVISOL (Consejo Hondureño de la Vivienda Solidaria), como organización político social que aglutina a familias empobrecidas que necesitan una solución digna de vivienda. Dentro de esta acción, en los últimos meses se ha venido luchando por la institucionalización del Programa de Vivienda Solidaria (PROVISOL) como medio para garantizar que las familias en condiciones de pobreza resuelvan sus necesidades de vivienda y hábitat... No dudamos que las dilatorias y enredos pueden estar siendo promovidos por los grupos de poder, como son los empresarios de la construcción y las instituciones dedicadas a la vivienda comercial, quienes históricamente han venido aprovechándose de los recursos del Estado para sus proyectos mercantiles. A esto se suman las influencias de los organismos financieros internacionales, quienes siguen mostrándose alérgicos a toda reivindicación que tenga carácter solidario y que represente organización popular.



Gustavo González:

“La vivienda es un derecho, no una mercancía”

Gustavo González es un uruguayo que habla con la energía y el empeño de un albañil social: “el problema de la vivienda en América Latina no puede resolverse sin el Estado; la vivienda es un derecho, no una mercancía”.

En su aseveración hay toda una línea de incidencia política y social porque Gustavo es un Asesor de Vivienda y Habitat que trabaja con el Centro Cooperativo Sueco y varias de sus contrapartes en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

La experiencia del ICADE es muy conocida por Gustavo, quien la califica como una de las más sobresalientes “no sólo por los grupos que asesora en la construcción misma, sino por la incidencia política que desarrolla a través de COHVISOL”.

La construcción y la organización van de la mano en este modelo de ayuda mutua que impulsa el ICADE, lo que a juicio del asesor uruguayo es correcto porque “se trata de construir viviendas con los propios beneficiarios como protagonistas y que el proceso se convierta en una verdadera escuela para la democracia directa y ciudadana”.

“En América Latina, afirma, 45% de las ciudades son construidas por la propia gente y en ellas se reflejan las inequidades y desigualdades existentes. Por eso tenemos ciudades segregadas: con los ricos viviendo enjaulados en sus mansiones, y una importantísima mayoría de pobres sobreviviendo en otros espacios, con graves limitaciones de acceso al trabajo, educación, salud y seguridad ciudadana”.

En ese contexto, Gustavo más que de vivienda habla de “hábitat”, con un enfoque claro de derechos. **Hábitat** tiene muchas definiciones, pero en la perspectiva del asentamiento humano se puede

definir de manera sencilla como el **espacio que reúne las características físicas y sociales necesarias no sólo para la supervivencia, sino para el desarrollo integral de quienes lo habitan.**

Cuatro paredes y un techo no hacen un hábitat. Se habla entonces de un contexto que provee oportunidades de acceso y atención en materia laboral, educativa, cultural, de salud, transporte, ambiental y recreación. Esas características hacen que nuestros barrios marginales no califiquen como “hábitat” y tampoco representen soluciones habitacionales sostenibles.

El punto, dice Gustavo, es que el suelo urbano se ha transformado en una mercancía costosa y con la implantación del modelo neoliberal se ha dado paso a otro tipo de latifundio urbano, donde los “dueños” se apropian para su provecho de la inversión social.

En ese sentido, cuando se habla de políticas justas para afrontar las necesidades de viviendas no caben las políticas de privatización de los servicios públicos, como el agua y la energía eléctrica. “La ofensiva neoliberal con esto de poner de eje central al mercado ha desregulado todos los derechos y sólo los asume quien puede comprarlos”, remarcó Gustavo.

¿Cómo ocurre ese despojo de los derechos sociales? Gustavo recoge de sus andanzas por América Latina una respuesta: “para defender los derechos primero hay que conocerlos y asumirlos como parte de la educación política que debe tener la ciudadanía; sin embargo, ello se vuelve más difícil en nuestros países porque el modelo neoliberal, al promover el debilitamiento de los movimientos sociales, impide a la gente el ejercicio pleno de sus derechos”.

Lo que esa realidad acumula a lo largo y ancho del continente es mayor ingobernabilidad. “América Latina es ya el continente con mayor grado de urbanización del mundo. Y esa tendencia seguirá, puesto que no hay indicios de que se frene la inmigración del campo a la ciudad. Al campesino desprovisto de todo, le exigen de todo y por eso tiene que emigrar”.

“Tenemos muchas ciudades inviables, incontroladas y descontroladas, y en ellas es que debemos luchar por implantar otro modelo; uno realmente humano, incluyente”, afirmó.

Bajo ese razonamiento, Gustavo planteó un desafío central: “yo creo que las ONGs que intervienen en esta problemática aportando soluciones, deben estar conscientes que su mejor papel es facilitar, acompañar y gestar movimientos sociales; no sustituir a los movimientos sociales. ICADE ha sabido interpretar este rol y evita quedarse con el proyecto”.

¿Cómo se logra? “Hay dos componentes que todo proyecto debe tener: capacitación y organización. Y

la cooperación internacional debe apoyar ese enfoque”.

No se trata, obviamente, de una receta; más bien la capacitación y la organización deben adaptarse a la realidad de cada país, promoviendo nuevos liderazgos y corrientes de pensamiento.

Sin duda, hay muchas tareas que estimular al mismo tiempo que se levantan nuevas viviendas dignas. “Tenemos que redefinir el concepto de **vecindad** y también la función del Estado. Insisto: se debe generar una escuela de nuevo pensamiento alrededor de demandas tan sentidas y centrales como es el acceso a una vivienda social digna”.

Ya son unos 36 los años que Gustavo suma como rodaje en la temática urbana y de vivienda social, desde que en su Uruguay natal los trabajadores se organizaron para que sus derechos no vivieran en la intemperie. A esos años habrá que agregar los que acumule en Honduras y Centroamérica no sólo porque está joven, sino por que no renuncia al compromiso de construir sociedades más justas.



Para comparar, el antes (la choza inhumana) y el después, la vivienda digna.



Resumen histórico del problema de la vivienda en Honduras

Por Luis Enrique Trundle Fagoth

En Honduras, históricamente las situaciones de la vivienda han sido resueltas por la población misma, ya que es hasta a inicios de los años sesenta del siglo pasado, cuando se da la intervención del Estado en la atención del problema habitacional. Hasta entonces y aún después, la producción de vivienda ha estado a cargo de las propias familias, mediante construcciones de carácter informal, generalmente muy precarias y con serias deficiencias en lo concerniente a materiales y calidad constructiva, o en lo que se refiere a la disponibilidad de servicios básicos.



Desde la época colonial y hasta años relativamente recientes, cada familia en lo particular asumía la tarea de resolver sus problemas habitacionales conforme a una modalidad primordial: la autoconstrucción, entendido éste concepto del modo más específico, pues consistía en que cada familia definía a su propia discrecionalidad el tipo y diseño de vivienda que mejor le parecía, utilizaba sus propios recursos y definía la mano de obra a emplear, prácticamente sin intervención de terceros o apenas tomando en cuenta algunas consideraciones familiares.

En toda esta época no existían políticas públicas ni programas de financiamiento a favor de la vivienda, de modo tal que ni el estado ni la empresa privada tenían presencia en la solución de la problemática habitacional de la población.

También eran escasas para la población las opciones para resolver colectivamente los problemas de servicios básicos de saneamiento, electrificación y equipamiento social para la vivienda. Con excepción de unas pocas ciudades que ya mostraban algunas disponibilidades al respecto, la mayoría de las ciudades secundarias y la casi totalidad de los poblados importantes y asentamientos rurales, carecían de servicios e infraestructura públicos. Lo

que sí existía, gracias a que todavía no se había enseñoreado el acaparamiento, era una importante disponibilidad de tierras para vivienda, pues la generalidad de los municipios de Honduras contaban con reservas ejidales y era fácilmente alcanzable para una familia obtener o adquirir un lote para su construcción.

Otro punto a destacar es que hasta la primera mitad del siglo pasado, hubo una gran predilección por el uso de tecnologías de tierra para la construcción de viviendas, con bahareque, adobe y ladrillo para el levantamiento de las paredes y con teja de barro para los techos, lo cual obedecía tanto a patrones culturales como a factores de costo, ya que estas formas constructivas permitían soluciones de vivienda verdaderamente al alcance de la capacidad de las familias. También se utilizaba la madera para la construcción de viviendas, no sólo entre las familias de escasos recursos sino entre familias pudientes que construían con diseños muy estéticos, que permitían una presentación muy agradable de las viviendas construidas con este material.

Con las influencias transculturizantes que el país recibe en sus relaciones con los centros de poder internacional, relaciones que se intensifican a partir



de la segunda mitad del siglo pasado, estas preferencias constructivas han ido disminuyendo paulatinamente a favor de la utilización de los productos de concreto, siendo éste el producto que en la actualidad más se utiliza en construcción.

La Vivienda en la Época del Estado Benefactor

En la década de los cincuenta del siglo pasado, los vientos del pensamiento keynesiano soplaban en todas direcciones e impulsaban fuertemente la participación del Estado no sólo en el ámbito político-social de Honduras, sino también en iniciativas relacionadas con el quehacer económico. Es así como a finales de la década del cincuenta del siglo pasado se funda el Instituto de la Vivienda (INVA) y el estado asume un rol protagónico en la solución del problema de la vivienda.



Una vivienda solidaria

Con la creación y puesta en funcionamiento del INVA, el Estado pasa a cumplir una importante función social sirviendo a las familias necesitadas de vivienda en condiciones bastante favorables. Durante tres décadas esta institución brindó buenas oportunidades de acceso a la vivienda para familias de escasos recursos. La objeción principal que se le puede hacer al INVA es que su obra no fue suficientemente masiva y se concentró mayoritariamente en la ciudad capital. También se puede señalar que atendió tarde y poco el aspecto cualitativo del déficit habitacional. Pero aún por encima de estas fallas, muchas familias recuerdan con nostalgia la época del INVA como la institución insignia de la vivienda hondureña.

Luego, en la década de los sesenta, además de la atención pública al problema de la vivienda a través

del INVA, se inicia la atención social organizada del problema habitacional de las familias, al integrarse la Federación Hondureña de Cooperativas de Vivienda Limitada (FEHCOVIL), la cual durante unas tres décadas promovió y organizó varias cooperativas de vivienda, a través de las cuales se proporcionaron valiosas soluciones para miles de familias.

En los setenta, surgen los institutos previsionales, que a su vez impulsan importantes proyectos de solución habitacional para sus cotizantes, contribuyendo de manera muy significativa a la atención del déficit habitacional, especialmente entre el sector docente y en la esfera de los empleados públicos.

Asimismo, durante la etapa de auge del estado en los años setenta florecieron importantes instituciones para enfrentar problemas sociales, y el de la vivienda no fue la excepción. Es así como se funda

la Financiera Nacional de la Vivienda (FINAVI) como entidad financiera de segundo piso que provee recursos para proyectos de vivienda a través del sistema bancario nacional. Por problemas de mala administración, contaminados a su vez por graves elementos de corrupción, quiebra la FINAVI y con ello colapsa la primera institución financiera oficial creada por el estado para atender la problemática de la vivienda. Para llenar este vacío, el Banco Central de Honduras obtiene recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y crea el Fondo de la Vivienda (FOVI), que también suministraba fondos para proyectos habitacionales a través de la banca comercial. El FOVI fue después la rama que, injertada con fondos para finalidades productivas, dio lugar a la creación del FONAPROVI, el que a su vez varió hacia lo que actualmente es el Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (BANHPROVI),



manteniendo hasta hoy el mecanismo de intermediación bancaria.

Lo anteriormente expuesto permite borrar una falacia que siempre ha circulado entre muchos analistas de la realidad nacional, que acostumbran decir que el mayor problema de la vivienda es que no hay fondos para solucionarlo. En verdad, desde hace más de 30 años ha habido recursos asignados por el estado para proyectos de vivienda, que suman a estas alturas miles de millones de lempiras. El problema ha consistido en que dichos recursos han estado condicionados a que los mismos sólo podían ser manejados por la banca comercial, lo cual provocó que dichos fondos hayan beneficiado principalmente a los propios bancos y a las empresas constructoras privadas (que los han invertido en proyectos para clase media), pero los han vuelto inaccesibles para las familias de bajos recursos, pues bien se sabe que los pobres ni son sujetos de atención en el sistema bancario ni forman parte del cuadro de clientes de los empresarios privados de la construcción.

Cabe aquí un apunte crítico para el sector financiero privado de Honduras, en el sentido de que el mismo prácticamente no aportó recursos propios para la solución del problema habitacional. Los bancos, e incluso las Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAP's) como instituciones que se fundaron específicamente orientadas al tema de la vivienda, no han sido más que meros intermediadores de fondos de otras fuentes financieras primarias, principalmente fondos nacionales de carácter público o aportes de la cooperación externa, pero lo que es asignar sus propios recursos a la atención del problema de la vivienda, nunca lo hicieron o lo hicieron en forma muy poco significativa. Sólo en los últimos tres o cuatro años, por influencia de la banca extranjera que se ha posicionado en el país y, más que todo, presionados por una abundante liquidez, los bancos comerciales han empezado a ofertar recursos propios para proyectos de vivienda, los cuales lamentablemente no están al alcance de los pobres.

Como contraparte a la citada actitud indiferente del sistema financiero nacional frente al problema habitacional de Honduras, surgen las iniciativas de los pobladores organizados que ocupan las periferias de las ciudades, principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y producen una serie de asentamientos informales que, si bien representaron una serie de problemas de orden jurídico y en lo relativo a planificación urbana, abrieron importantes válvulas de escape para desahogar la presión social por el problema de la vivienda.

Estas iniciativas, normalizadas después con acciones de legalización de tierras y de mejoramiento de barrios, impulsadas generalmente por los gobiernos municipales, dieron una valiosa contribución a la solución del problema de vivienda para miles de familias urbano- marginales.



La Vivienda en la Actual Etapa Neoliberal

Es así como se llega a los años noventa, momento a partir del cual se establecen las políticas neoliberales, y se impone un fundamentalismo mercantil conforme al cual la vivienda deja de

ser un bien social para convertirse en una simple mercancía. Por influencia de los organismos financieros internacionales, especialmente el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se adoptan con marcado sectarismo una serie de medidas encaminadas a reducir el tamaño y la actividad del Estado, por lo que en materia de vivienda éste queda reducido al simple papel de regulador y facilitador, habiéndosele despojado de toda atribución ejecutora y dejando exclusivamente en manos del mercado y sus agentes la función de ser los proveedores más importantes de vivienda.

Bajo esta orientación se elimina el INVA como institución nacional encargada de proveer soluciones habitacionales para la población de ingresos medios bajos y bajos, constituyéndose el Fondo Social para la Vivienda (FOSovi) con la prohibición de ser

ejecutor de proyectos de vivienda. La creación del FOSOFI dio al traste con una experiencia muy respetable en cuanto a vivienda social, al deshacer la única institución que acumulaba ya un acervo valioso en esta materia. Para colmo de males, antes de cumplir sus primeros cuatro años de vida el FOSOFI fue víctima de un contrato de fideicomiso, del cual lo menos que se puede decir es que fue terriblemente leonino para la institución, al permitir que pasaran a intereses privados una serie de activos que el FOSOFI heredó del INVA, principalmente importantes patrimonios de tierras adquiridas para proyectos de vivienda social.

Así las cosas, el FOSOFI vino a resultar una institución totalmente inoperante, a grado tal que resulta completamente gráfica para describirlo la frase acuñada en su momento por uno de los miembros de su máximo organismo directivo, el Consejo Nacional para la Vivienda, quien frente a la incapacidad absoluta de dicho ente, en una declaración a los medios de comunicación, afirmó: "El FOSOFI es una institución tan nula, que ni siquiera ha hecho una sola vivienda y ya perdió hasta su propia vivienda", refiriéndose al hecho de que a esta institución se le quitó el edificio propio que heredó del INVA, para ser entregado a la Junta Nacional de Bienestar Social y después a la Contraloría General de la República, hoy Tribunal Superior de Cuentas.

Dentro del marco jurídico e institucional del FOSOFI, se funda el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), como organismo proveedor de soluciones de vivienda para los trabajadores de empresas privadas, en un sistema de cotización que provoca una aportación del 1.5 % del sueldo nominal de cada trabajador y una aportación equivalente de

las empresas o patronos. Bajo este mecanismo de captación, este organismo ha llegado a dotarse de cuantiosos recursos para solucionar problemas de vivienda, pero con el agravante de que, debido a que la colocación y canalización de sus recursos se hace exclusivamente a través de los bancos comerciales, ha incurrido en una cruel paradoja: la masa de aportantes de bajos ingresos no tiene acceso a sus fondos por la rigidez institucional del sistema bancario, y sus aportaciones están sirviendo básicamente para favorecer a una minoría de altos ingresos.

Para redondear los nefastos acontecimientos que



La vivienda requiere organización y capacitación

se dieron en el sector vivienda durante la década de los noventa, cabe decir que se produce una fuerte crisis en FEHCOVIL (la cual a estas alturas no ha sido del todo superada), empiezan a desaparecer las AAP's (casi todas girando a convertirse en bancos) y, fundamentalmente, el Estado abandona

su responsabilidad social en cuanto al tema de la vivienda. Además, como una grave secuela que dejó la quiebra de la FINAVI, durante muchos años que se cuentan a partir de la segunda mitad de los ochenta, las fuentes de recursos internacionales se secaron para el sector vivienda.

La Agencia de Cooperación del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID) y los organismos multilaterales, fueron los primeros en cerrar sus válvulas de financiamiento a la vivienda, quedando sólo la cooperación alemana vía KFW en apoyo al sector, acompañada desde finales de los noventa por la cooperación Sueca a través de Asdi. Esta sequía financiera se subsanó después del Mitch, cuando algunos países han continuado apoyando al sector, incluyendo



importantes aportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha proporcionado recursos mediante préstamos concesionales para subsidiar la vivienda para los pobres.

La única noticia positiva que se puede mencionar en esta década es la puesta en funcionamiento de los programas de la cooperación financiera alemana, que por medio del programa PRIMHUR ofrece opciones bastante favorables para familias pobres urbanas, y la intensificación del programa PVMR en beneficio de las familias pobres rurales. Estos programas, fortalecidos a finales de la década por el apoyo financiero y técnico de la cooperación sueca, cumplen no solo una buena labor por sí mismos en cuanto a dotación de soluciones habitacionales para familias pobres, sino que se juntan y dan paso a la constitución de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural (FUNDEVI), que también continuó siendo una importante opción de vivienda para la población económicamente desfavorecida.

Así las cosas, el problema de la vivienda en la actualidad se puede resumir en los siguientes aspectos:

- a) La tierra es cada más escasa y cara, lo que incluye que muchos municipios se han quedado sin ejidos, ya que a estas alturas la mayoría han pasado a propiedad de particulares, generalmente por componendas políticas o razones de amiguismo.
- b) Cada vez se vuelve más acentuada la escasez de recursos para financiar la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios básicos concatenados a la vivienda. En muchos casos hay proyectos de vivienda ya construidos, pero sin agua ni luz, por lo que se encuentran deshabitados.
- c) El uso y abuso de los fondos públicos para la vivienda que, como siempre ha ocurrido, han sido manejados hasta ahora exclusivamente por la banca comercial, sirve únicamente para favorecer a grupos privilegiados de la banca y de las empresas privadas de la construcción.
- d) Persiste una fuerte desarticulación del sector vivienda, lo que incluye la carencia de una política coherente y sostenida sobre esta

materia, y una grave ausencia de legislación y normativas adecuadas para el sector vivienda.

Como conclusión de todo lo anterior se puede decir con toda propiedad que, en estas condiciones, los pobres de Honduras no pueden acceder a una vivienda digna, ya que:

- ✗ La vivienda no es considerada un bien social sino como puro objeto de comercio y, como tal, se le califica como negocio particular de los bancos y empresas constructoras.
- ✗ Los recursos del Estado para vivienda se ubican y se canalizan en los bancos privados, a los que acceden solamente los grandes empresarios de la construcción.
- ✗ Se desconoce la moral de pago de los pobres y se les considera como población de alto riesgo, no elegibles como sujetos de crédito del sistema bancario privado
- ✗ La vivienda para los pobres sólo ha servido como instrumento para la demagogia política, como bandera electoral que se levanta cada cuatro años.

El Marco Jurídico - Político de la Vivienda

Otra de las deficiencias históricas que Honduras ha mostrado siempre ante propios y extraños, es la falta de políticas de vivienda, sostenidas y coherentes. A pesar de que se han hecho algunos intentos por subsanar esta deficiencia, lo que un gobierno inicia el siguiente lo abandona para asumir otra iniciativa de cuño propio. Es así como, desde hace cerca de diez años viene manejándose un anteproyecto de Ley Marco del Sector Vivienda que se elaboró con apoyo de consultores externos, y hasta la fecha sigue sin aprobarse porque cada gobierno ha querido revisarlo para imprimirle su sello particular.

La prueba más penosa de esta ausencia de políticas y de legislación para la vivienda, se dio durante la época contingencial del Huracán Mitch (1998), situación que se vio agravada por el hecho de que no



hubo, en esos momentos dramáticos para el país, un ente que ejerciera una rectoría efectiva y que marcara líneas de acción para las acciones de reconstrucción del parque habitacional que había sido destruido. SOPTRAVI recién había sido constituido como ente rector y en esas condiciones no tenía la capacidad institucional para enfrentar el reto, además de que a este organismo le tocó también atender simultáneamente la gran tarea de reconstrucción en cuanto a carreteras y puentes destruidos.

Así las cosas, los ingentes volúmenes de ayuda recibidos de la comunidad internacional, no se manejaron con toda la racionalidad que la situación permitía (y exigía), dando lugar a un despilfarro de fondos y a una asignación caótica y desordenada de las soluciones habitacionales, donde incluso se proporcionaron viviendas a personas que no fueron directamente afectadas por dicho fenómeno meteorológico, y que en muchos casos ni siquiera necesitaban de una vivienda, marginando a otros que sí las necesitaban.

Todo esto es producto del desorden y la discontinuidad crónica que ha padecido el país, donde cada gobierno le pone su impronta política partidaria al tema de la vivienda. Desde la desaparición del INVA se perdió la institucionalidad en el sector vivienda y con cada nuevo intervalo de gobierno han surgido distintos programas particulares, entre los cuales se pueden citar: Programa de Vivienda para Parejas Jóvenes (Administración Reina), Programa Complemento al Esfuerzo Propio (Administración Flores), Programa de Vivienda Para la Gente (Administración Maduro) y, en el gobierno actual, Programa de Vivienda Ciudadana. Con excepción de éste último (que todavía no ha cumplido su tiempo para juzgarlo) estos programas han quedado en el plano de las buenas intenciones pero, en mayor o menor medida, todos han sido un fracaso.

Para finalizar este segmento, es procedente mencionar la tarea que han cumplido en el campo de la vivienda las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que en varios casos han incursionado en el tema de la vivienda. Los resultados de estas entidades han sido bastante desiguales, pues por un lado muchas de ellas han tenido intervenciones puramente coyunturales, en momentos de contingencia, por lo que su labor ha sido muy efímera. Por otro lado, hay

algunas ONGs que sí han desarrollado una labor consistente y han alcanzado algunas ejecutorias respetables, cuyos resultados y experiencia acumulada siguen siendo aportes valiosos para la solución de los problemas habitacionales de los hondureños y hondureñas.

Creación del COHVISOL y PROVISOL

El ICADE, con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco, el grupo de agencias de cooperación conocidas como ACI-ERP, la Agencia Católica Irlandesa TROCAIRE y Hábitat para la Humanidad ha pasado de la ejecución de Proyectos de Vivienda por Ayuda Mutua, a la promoción y organización del Consejo Hondureño de la Vivienda Solidaria (COHVISOL).

COHVISOL nace como producto de una fuerza social aglutinadora de distintas organizaciones de sociedad civil y gobiernos locales, las cuales comparten que las respuestas dadas hasta ahora desde el Estado en pro de la vivienda social, son precarias e irregulares para los intereses de los pobres, aunque muy consistentes con los intereses de los especuladores en el mercado de tierra.

Desde esta posición el COHVISOL es una fuerza social organizada, pluralista e inspirada en los principios humanistas de la economía social, y por lo tanto, es parte del Sector Social de la Economía.

Luego de tener un carácter de organismo civil, el equipo de dirigentes de COHVISOL, con el apoyo del ICADE, y después de diez meses de discusiones en talleres nacionales y regionales, logró formular el Programa de Vivienda Solidaria (PROVISOL).

Construcción del PROVISOL

El PROVISOL es considerado como la propuesta de los sectores empobrecidos de la población y del sector de clase media baja en materia de vivienda social.

El COHVISOL, por medio del PROVISOL, tiene el propósito de contribuir en la solución del grave



problema de exclusión de la población empobrecida al derecho de tener una vivienda y un hábitat digno.

El PROVISOL se justifica en que *la vivienda digna, es un derecho Constitucional*, tal como lo estipula el artículo 178 de nuestra Carta Magna, que dice textualmente: *“se reconoce a los hondureños el derecho de vivienda digna. El Estado formulará y ejecutará programas de vivienda de interés social. La Ley regulará el arrendamiento de viviendas y locales, la utilización del suelo urbano y la construcción, de acuerdo con el interés general.”*

Luego de su organización, el 25 de abril del 2006 PROVISOL entregó su propuesta al Presidente Manuel Zelaya Rosales, quien prometió darle apoyo y seguimiento a la iniciativa. Unos tres meses después, el 14 de julio, el gobernante suscribió seis acuerdos con el Secretario General del COHVISOL.

En dichos acuerdos quedaba establecido, entre otros, el compromiso de institucionalizar el PROVISOL por medio de un Decreto. Además se daría comienzo a la ejecución del Programa en el 2006, con un financiamiento de 800 millones de lempiras disponibles en BANHPROVI. También se estableció que se fijaría una partida en el Presupuesto General de La República para la vivienda solidaria; y, que los fondos del Programa se canalizarían por medio de las cooperativas de ahorro y crédito.

Hasta el momento, sólo el compromiso del reconocimiento institucional del *Programa de Vivienda Solidaria (PROVISOL)* se hizo efectivo,

hecho histórico que se logró en el mes de octubre del 2006, con la aprobación del Decreto Ejecutivo PCM-39-2006.

Por su parte, las cooperativas de ahorro y crédito demandaron la reforma de dos artículos de la Ley de BANHPROVI, con el fin de tener la seguridad de un acceso legal al manejo de fondos del Estado. (Aunque se les ha abierto una cuenta en el Banco Central, éstas sostienen que tal medida debe ser transitoria mientras se acuerda dicha reforma).

La firme posición del COHVISOL y del ICADE



Como en todo manejo de dinero público se da la suspicacia, el COHVISOL y PROVISOL dejaron en claro que no administrarán los recursos destinados a financiar el Programa de Vivienda Solidaria. Estos serán manejados por las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las cuales previamente se

seleccionarán.

La calificación no será responsabilidad de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ya que las cooperativas pertenecen al sector social de la economía y no son parte del sistema bancario privado. En igual dirección serán calificadas las instituciones técnicas desarrolladoras de los proyectos de vivienda. Esta calificación, como la evaluación de su desempeño, la hará el PROVISOL. No serán entidades con fines de lucro. En ambos casos se tendrá la fiscalización y vigilancia del COHVISOL, el Estado y la población meta.



Hay una gran expectativa en torno a que con esta importante conquista, la fuerza social organizada del sector vivienda que es el COHVISOL, con su enfoque pluralista abanderado en los principios humanistas de la economía social, y su programa insignia, el PROVISOL, contribuirán efectivamente a convertir en realidad el derecho constitucional de todos los

hondureños y hondureñas a poseer una vivienda digna. Con ello, grandes contingentes de familias económicamente desfavorecidas están esperanzadas en que la historia del sector vivienda de Honduras se escriba, por fin, con una tinta del color del pueblo pobre.

Honduras: 66% de las viviendas son deficientes

Por Melvin Nelson Naira, BBC de Londres

El día a día del hondureño promedio es convivir con enfermedades endémicas relacionadas directamente con la carencia de una vivienda digna. El tema de la vivienda en Honduras es altamente preocupante, estudios establecen que el 66% de las viviendas son deficientes; éste es, construidas con cartón, madera, adobe y todo tipo de desechos.

El hacinamiento es extremo al punto de que entre 4 y 10 personas viven en una sola habitación y con servicios básicos mínimos o inexistentes. Ésto se ha incrementado con la llegada a los centros urbanos de personas que con el afán de encontrar una solución a las precarias condiciones de hambre y olvido que viven en el interior del país, emigran a centros urbanos que no están preparados para albergar más pobladores.

El día a día del hondureño promedio es convivir con enfermedades endémicas relacionadas directamente con la carencia de una vivienda digna, como lo son la difteria, el dengue, enfermedades respiratorias y el temido "mal de Chagas", enfermedades favorecidas por condiciones idóneas para su proliferación, ya que la mayoría de los asentamientos humanos carecen del drenaje de aguas residuales, agua potable y calles pavimentadas.

Otro problema es la geografía del lugar y la planificación inexistente, que ocasiona que muchas viviendas sean construidas en zonas de alto riesgo como riveras de ríos y laderas de montañas. Cada año las lluvias, en lugar de ser una bendición, son un martirio para miles de personas, ellos saben cuál es el peligro que corren al vivir en esos lugares, pero la desesperación es tal que están dispuestos a exponer sus propias vidas y las de sus familias.

El poco remanente de clase media que aún existe debe sortear uno y mil problemas para adquirir o alquilar una vivienda digna, sueldos bajos, alto costo de vida, inflación, altos intereses de los préstamos, costos de construcción elevados y falta de apoyo gubernamental, son algunos de los problemas principales.

Pero estas dificultades también dan origen a ideas tan insólitas, dignas de "ver para creer", por ejemplo un grupo de personas construyen casas con botellas de gaseosas llenas con arena y tierra, insólito y creativo a la vez...

(Tomado de la BBC Mundo.com **Viernes, 24 de marzo de 2006**)



La “locura” solidaria de la vivienda digna

El trabajo que realiza el ICADE con el fin de facilitar a los pobladores un hábitat digno, es totalmente multidisciplinario. Cada profesional involucrado aporta desde sus respectivas capacidades los esfuerzos que hacen posible que los objetivos trazados se cumplan. No es tarea fácil, más bien parece una tarea de “locos”, pero de una locura solidaria que consiste en remar contra la corriente de una sociedad donde impera el lucro y el egoísmo. Una sociedad donde grandes mansiones, como de cuentos, crecen en medio de un mar de pobreza y desigualdad.

En el ICADE se sabe que las expectativas levantadas a través de los proyectos de vivienda solidaria sólo pueden ser respondidas a través de un arraigado compromiso social, basado en la idea de que el derecho a una vivienda digna va más allá de

cuatro paredes y un techo. Esa es la línea que mantienen cada uno de los agentes facilitadores de este proceso. Y para los miembros del ICADE la aventura solidaria tiene costos y riesgos. El costo de no siempre atender a la familia con el tiempo deseado, ni siquiera los fines de semana, y el riesgo de viajar de un lugar a otro, en horas muy tempranas o muy tarde, lidiando con el cansancio y las gestiones.

En esa dinámica está involucrada la arquitecta Valeria Bueso. “Pasante” de Arquitectura, se apresura a aclarar, “porque todavía tengo que cubrir unos requisitos de acreditación y cuesta porque siempre hay gente poniendo obstáculos”. Y es que Valeria estudió en Cuba la carrera de Arquitectura, algo no tan usual puesto que la mayoría de los becarios hondureños estudian medicina en la isla caribeña.

Pero Valeria cuelga sus preocupaciones personales y académicas en un perchero, y en el ICADE se ocupa

de lleno en lo que verdaderamente es la razón de ser de su profesión: ayudar a la gente a contar con un espacio digno de vida.



Su trabajo no se reduce a un buró, como filosofía personal y del ICADE; el trabajo de la arquitecta Bueso inicia en el

campo y termina en el campo. Al iniciar un proyecto, se reúne con los pobladores y les presenta algunas posibilidades de diseño, para así llegar a un acuerdo mutuo que cumpla con las exigencias de las necesidades. Luego se pasa al análisis socioeconómico donde se define la factibilidad del proyecto; cubriendo este proceso, la arquitecta aporta la asistencia técnica que posibilita ver el sueño hecho realidad.



Su asesoría está en muchos momentos del proceso, siempre tratando de transmitir parte de sus conocimientos a quienes se beneficiarán de los proyectos. Es Arquitectura Social, no Arquitectura para el negocio privado.

Para decirlo en sus propias palabras, la Arquitecta contestó las siguientes preguntas:

-¿Cuál ha sido su labor dentro del ICADE?

He trabajado en la parte técnico constructiva de los proyectos, dentro del programa que está basado en la ayuda mutua. He trabajado dentro de la parte de capacitación, ayudándole a la población en cómo se construye un proyecto por ayuda mutua, en la ejecución y supervisión de esos proyectos y en toda su etapa constructiva. Además coopero en la planificación y desarrollo de los proyectos hasta la ejecución final.

-¿Cómo valora el trabajo que ICADE ha hecho en materia de la vivienda social?

El éxito se está reflejando de diversas maneras, por ejemplo en lo que tiene que ver con la acción del COHVISOL; todo esto tiene un valor incalculable a la hora de traducirlo en proyectos. Con este programa esperamos poder llegar a todos los grupos donde se han levantado expectativas.

El ICADE no es nuevo en esto. Después del huracán Mitch (1998) se construyeron más de mil viviendas en las zonas afectadas. Ahora estamos en otra fase de esta experiencia, con proyectos en varias partes del país donde se están levantando viviendas dignas.

-¿Cómo definiría una vivienda digna?

Técnicamente primero tiene que suplir las necesidades familiares, evitar el hacinamiento (tan propenso en nuestro país); sería una vivienda con un espacio mínimo de 48 metros cuadrados, dos dormitorios (hablamos de un núcleo familiar de una pareja y sus hijos); sala, comedor, cocina, con todos sus servicios, principalmente el agua potable; nosotros tratamos que todos los proyectos tengan agua potable y aspiramos también a que se vuelvan espacios de encuentro de la familia.

-¿Cómo es el proceso del diseño de las casas?

Nos reunimos con la población y les preguntamos qué vivienda desearían de acuerdo a sus necesidades. Nosotros les llevamos hasta modelos, para que vayan teniendo una noción de lo que se trata (incluso les llevamos maquetas); ellos me entregan dibujos también. Luego se les hace un análisis socioeconómico para saber si realmente pueden construir lo que desean. Después analizamos la capacidad del proyecto y aportamos asistencia y supervisión en la construcción.

-¿El costo promedio de construcción a cuánto asciende?

Como nosotros trabajamos por ayuda mutua hay un costo que prácticamente se erradica, que es el de la mano de obra, pues ellos mismos lo aportan. Eso abarata en un 30% la construcción. Además, no hay ninguna ganancia con la construcción. Por ejemplo, una vivienda de 48 mts 2 que hemos desarrollado en el proyecto Hicaque nos salió aproximadamente en 60 mil lempiras. El piso es de concreto simple, las casas son pulidas y sisadas, luego el propio abaratamiento de la obra les permite tener un ahorro para invertir en repello; algunos incluso pudieron poner puertas de madera de color. El diseño arquitectónico es funcional, permite que las casas tengan su portal, su fachada bonita.

-¿Cuáles son las diferencias entre los procesos de vivienda que impulsó el ICADE post-Mitch a los actuales?

Aquello fue más que todo con el fin de solucionar problemas de emergencia. Habían otras condiciones; más bien de ese se agarró el aprendizaje, lo positivo, con el fin de armar el programa de vivienda solidaria del ICADE. Durante el periodo post-Mitch no hubo un programa en sí; y esa experiencia hizo que se formara un programa ya más integral.

-Bajo su percepción de arquitecta, ¿cómo califica los ahora comunes proyectos habitacionales masivos?

No tienen ninguna relación con lo que nosotros hacemos; pues esos enriquecen a la empresa privada,



y sus costos son exageradamente altos, la utilidad o preventas con la que se quedan las empresas constructoras son exageradas, más de un 100%. La vivienda que nosotros hacemos, que nos cuestan unos 60 mil lempiras, en Comayagua las está realizando una constructora privada en 190 mil lempiras. Yo digo que en ICADE lo que hace la diferencia son sus principios sociales.

-¿Cómo calificaría la política pública de parte del gobierno en materia de vivienda?

Bueno, esa política no existía hasta la aparición de nuestros programas del COHVISOL y el PROVISOL. Nosotros trabajamos en agosto del 2005 un foro donde se invitó a los cuatro candidatos a la presidencia para que expusieran sus propuestas de vivienda, y ninguno de ellos tenía una.

-¿En el plano de la construcción que obstáculos han sacado adelante desde el primer proyecto de vivienda?

En la parte constructiva, hemos desarrollado mejor los proyectos en su planificación. Ha sido más organizada, los documentos son más específicos. Existen planos para todo. Hacemos más talleres con los pobladores.

-Desde el plano personal profesional, ¿qué tanto aprendizaje le ha dejado esta experiencia?

Muchísima. Supuestamente los arquitectos trabajamos en planificación y en diseño; yo he tenido que abarcar mucho más, en la ejecución, supervisión, en la parte final, presupuestaria, he logrado aprender con la comunicación que se tiene con los beneficiados; he tenido que desarrollar el diálogo, la comunicación. Trabajando con los pobladores creo que he encontrado la horma de mis zapatos.



“Yo digo que en ICADE lo que hace la diferencia son sus principios sociales”



Una Estrategia de Reducción a la Pobreza ...sin techo

El tema de la “vivienda” en Honduras no es valorado como uno de los referentes principales para comprender la pobreza en el país. A la crisis habitacional no se le impone el mismo estado de gravedad que a otros apartados, como el de la seguridad o la educación. Prueba de ello es que en la agenda de inversiones de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), la “vivienda” está clasificada como un sub-sector, lo que lo convierte en un sector de “tercera importancia” dentro de este fondo económico.

Pero que la ERP no le infiera una importancia mayor al tema de la crisis habitacional no es algo nuevo. La desatención que la vivienda social sufre en la actualidad es producto del olvido de más 15 años, en los cuales el Estado hondureño no ha impulsado el desarrollo financiero e institucional que requiere esta agenda. Pero tampoco se puede adjudicar toda la responsabilidad al Estado; en la Sociedad Civil, particularmente empresas no lucrativas y organizaciones de apoyo de la economía social, ha hecho falta que el tema de la “vivienda social” sea parte de su agenda de actividades y proyectos.

Aunque en Honduras, tanto con la ERP o con los fondos que se recibieron a partir del huracán Mitch, se desperdició una oportunidad para impulsar una política nacional de vivienda, las coyunturas se siguen dando. Se sabe que la Secretaría de Gobernación recientemente ha elaborado un Ante-proyecto de una nueva Ley de Inquilinato que pretende sustituir a la vigente, erogada en 1966 y según los expertos, obsoleta.

Según afirman los que conocen el Ante-proyecto, la puesta en marcha de esta ley podría presentar oportunidades a un buen número de inquilinos para acceder a mecanismos de financiamiento, y mediante

ellos, convertirse en propietarios, al poder comprar las unidades que hoy alquilan.

Devaluados también por la ERP

Quienes pensaron que la ERP impulsaría una política nacional de vivienda se equivocaron. Este plan de ataque a la pobreza le ha conferido una ubicación de tercera categoría al tema de la “vivienda social”. Según COHVISOL, clasificar a la “vivienda social”, como es el caso, como un “sub-sector”, es otra manera de anunciar que la ERP no planea financiar ni otorgar créditos para la construcción de “vivienda social”.

Quienes están al frente de las instituciones que promueven la “vivienda social” vislumbran un panorama bastante negativo con la ERP, y afirman que si la ciudadanía y la sociedad civil no están vigilantes del proceso, el destino de este fondo no se decidirá con “el pueblo” sino con otros actores, cuya orientación principal será realizar un negocio lucrativo. Afirman que de ser así, los mayores beneficiarios de la ERP seguirán siendo los especuladores de la tierra, los urbanistas, los constructores de casas nuevas, y los banqueros, no las capas más vulnerables de la sociedad.

COHVISOL tiene el temor de que en la ERP imperará una visión dominada por políticas y prácticas de corte neoliberal. En la ERP constantemente se proponen acciones colectivas, comunitaria y de estilo social, que presumiblemente apoyan el crecimiento de la economía social y equitativa. No obstante, al momento de tomar las decisiones las reglas las ha impuesto el sector más conservador del poder Legislativo, que no ha fallado en agregar “mecanismos de mercado” que desfiguran los objetivos originales.



Lo que todavía no ocurrió

Quienes necesitan vivienda social no tienen la capacidad adquisitiva para lograrla por sí mismos; descontado está que si se atienen a los mecanismos de mercado existentes, les irá peor. En teoría, el Estado tendría que intervenir, bien para reducir costos —de permisos, impuestos, de materiales, financiamiento— o creando mecanismos de subsidio, que vayan directamente al que “carece de ingresos suficientes” y necesita vivienda.

En otros países ya hay casos dignos de “ser replicados”, pero en Honduras todavía no ha ocurrido (o muy poco) que se promuevan proyectos y programas de vivienda efectivos (para los pobres) que complementen recursos públicos, privados y autogestionarios —comunitarios, familiares e individuales.

El cambio podría comenzar a suceder si las instituciones del sector de economía social tuvieran proyectos pilotos, o contrapropuestas probadas en la práctica. Y que esas iniciativas adquieran la capacidad de incidir políticamente, puesto que al final de estos procesos siempre está la cuestión del poder.

Las organizaciones que impulsan la economía social deben presionar más a las instancias organizativas de la ERP, para que no releguen el tema de la vivienda social y le reconozcan su carácter vinculante con otros derechos.

Lo que podría ocurrir

Pero no todo es desesperanza y oportunidades fallidas. El país sigue abriendo coyunturas para que

la “vivienda social” encuentre su camino. En el transcurso de 2007 el Gobierno se ha comprometido para mocionar nueva Ley de Inquilinato que sustituya a la que actual, que, según indican los expertos, ya está obsoleta.

¿Cómo puede ser una oportunidad para impulsar la “vivienda social”? Primeramente, la condición de inquilino es un hecho urbano, más acentuado en San Pedro Sula que en Tegucigalpa. Afecta directamente a más de 200 mil personas, entre inquilinos, arrendadores y propietarios de cuarterías, casas y locales. La puesta en marcha de la nueva Ley

de Inquilinato, sostiene COHVISOL, abriría la oportunidad para instituir mecanismos de financiamiento para que los que alquilan una vivienda desde hace mucho tiempo, tengan oportunidad de adquirirla.

A su vez, la Ley pretende favorecer a arrendadores que poseen propiedades con infraestructura y servicios deficientes o deteriorados, brindándoles la oportunidad de acceder a líneas blandas de financiamiento, orientadas específicamente a ellos, para que mejoren las facilidades que hoy ofrecen de forma inadecuada a sus inquilinos.

Se ignora el número, pero se sabe que Honduras cuenta con decenas de miles de ciudadanos (as) con niveles de ingresos propios de “clase media” que pagan por su inquilinato mensual más de lo que demandaría un banco “que fomente la vivienda”. Pero precisamente siguen alquilando casa o apartamento porque no hay una entidad que les permita ahorrar ni les ofrezca facilidades económicas viables para abonarse una prima inicial.



La vivienda social es efectiva para combatir la pobreza.



Finalmente, hay todavía más preguntas que respuestas, y aunque la Ley de Inquilinato es una probable oportunidad para impulsar una política nacional de vivienda, es menester del Estado y la Sociedad, al menos eso es lo que COHVISOL considera, conocer mejor el tema y sus variables.

Los pobres:

Administradores, arquitectos y albañiles de sus propias viviendas

Históricamente en Honduras el derecho a tener una vivienda digna ha estado ligado a las posibilidades económicas de las clases sociales. Así, la población mayoritariamente pobre, con su presupuesto individual, ha trabajado como “administrador, arquitecto y albañil”, con el fin de resolver sus necesidades de vivienda. En otras palabras, la producción de vivienda ha estado a cargo de los propios ciudadanos.

Ello explica, de alguna manera, que las construcciones de viviendas en Honduras se caracterizan por su informalidad (se estima que 70% de las viviendas se construyen fuera del sistema formal, la gran mayoría sin títulos de propiedad), generalmente son precarias y con serias deficiencias en lo concerniente a los materiales y calidad constructiva, o en lo que atañe a la disponibilidad de servicios básicos.

La realidad social marca las pautas urbanas. Alrededor de 46 % de todas las propiedades en Tegucigalpa fueron obtenidas mediante invasiones ilegales de terrenos, a veces por pobladores pobres; y en otras por ricos terratenientes urbanos.

El tema de la propiedad es tan complejo que apenas 13 % de los pobladores poseen títulos - imperfectos y restringidos- sobre los terrenos que ocupan.

A la acumulación tradicional de las desigualdades, se suman fenómenos naturales que agravan el panorama. Después del paso del huracán Mitch, por ejemplo, los porcentajes de vivienda deficiente aumentaron del 63,1% en marzo de 1998 a un 66% en marzo de 1999.

Una vivienda deficiente en Honduras significa que está hecha de materiales de poca durabilidad y altamente vulnerables, de cartón y piezas de plástico. Constan de un espacio reducido, en el que de cuatro a diez personas viven en una sola habitación. Las estadísticas revelan que en 10% de los hogares hondureños hay un promedio de más de 6 personas viviendo en un cuarto, por lo que ese hacinamiento se vuelve una de las violaciones más graves a los derechos humanos, con secuelas diversas y dolorosas.

La realidad en cifras

En Honduras se estima que existe un total de 1,308,019 viviendas, de las cuales 71% son propias, 14% alquiladas, 11% son cedidas sin pago y 4% son viviendas recuperadas. Un 59% de las viviendas propias están ubicadas en el área rural, el resto se distribuyen en el área urbana. En lo que respecta a las viviendas alquiladas el 88% se encuentran en el área urbana ya que en este sector es mucho más difícil adquirir una vivienda, principalmente en las ciudades grandes y medianas, por el alto costo del terreno y de la construcción. Las viviendas cedidas sin pago en un 58% están ocupadas en el área rural, y el 71% de las viviendas recuperadas sin legalizar están en el área urbana.

Para entender el real significado de estas cifras, y así apreciar el esfuerzo que las familias hondureñas están haciendo por lograr un sitio donde cobijarse, habrá que recordar y tomar en cuenta los altos índices de pobreza y pobreza extrema, que rondan entre el 74% y 57% de la población rural y urbana de Honduras. Y pobre, se define en nuestro país, es aquel que sobrevive con apenas dos dólares al día.

El drama ha estado visible a los ojos de cualquiera, pero a través de los años la sociedad hondureña ha carecido de una política pública que enmarque el derecho que tienen todos los ciudadanos a una vivienda digna.

Casa de Oro, un proyecto de viviendas con aroma a café

Después del paso del huracán Mitch, han sido más de 1,500 los beneficiados por los programas de



vivienda del ICADE. Cada beneficiado representa una casa, y cada casa representa una familia y cada familia representa el ejercicio práctico de la ciudadanía social.

En la actualidad el ICADE dejó atrás la fase de “emergencia y reconstrucción” provocada por el huracán y retoma lo que el Estado dejó abandonado: la fase de la transformación nacional. No se trata únicamente de “viviendas”, sino de la defensa de un conjunto de derechos humanos básicos.

El proyecto Casa de Oro, ubicada en El Paraíso, que involucra a 40 familias, es un ejemplo de esta nueva experiencia social.

En las faldas de las montañas cafetaleras próximas a la ciudad de El Paraíso, se encuentra la cooperativa de vivienda Casa de Oro, fundada el 7 de diciembre de 2003. Luego de su organización llegaron las primeras ayudas externas: el Centro Cooperativo Sueco financió la construcción de la Casa Comunal, lugar que sirve para sostener las reuniones y

actualmente se utiliza como bodega de la construcción; posteriormente la alcaldía de El Paraíso facilitó la compra del terreno donde se construyen las casas.

Clave en el proceso ha sido el apoyo logístico y técnico que el ICADE ha brindado, aportando su credibilidad y capacidad en la obtención de un financiamiento de 2.6 millones de lempiras que Hábitat para la Humanidad aprobó a favor del proyecto. Es así como este proceso de ayuda mutua ha hecho posible que hoy día las 40 casas estén en su etapa final.

Para los planes de vivienda social que el ICADE mantiene en varios puntos del país, el proyecto de Casa de Oro se concibe como un modelo. “Este es el primer proyecto que cuenta con las siguientes características: es de autogestión, de autoconstrucción y de ayuda mutua”, comenta Carlos Turcios, educador en el programa de vivienda social dentro del ICADE.



Millones de pobres se las arreglan como pueden para sobrevivir.



Se espera que el proyecto se termine a principios del año 2007. Mientras tanto, los siguientes son testimonios de quienes lo hacen posible.

“Y un 7 de diciembre se fundó la cooperativa”

Quienes se benefician del proyecto de vivienda de Casa de Oro creen en la organización. Teófila Galindo Sosa es una de ellas. Siendo madre de familia de 7 hijos, esta facilitadora de la educación (en el área rural de El Paraíso) cree que organizados es como se alcanzan las metas: “sola no podría hacer nada, lo posible es con el grupo”, afirma.

Ella, como muchas más, también ha trabajado en el proyecto. Es fundadora de la cooperativa. Tres años después de su creación cuenta con emoción los inicios de la cooperativa: “yo oí decir que se estaban anotando las personas que no tuvieran casa, entonces una cuñada mía estaba ahí, entonces me junté, y en la alcaldía llené una solicitud y desde entonces empezamos a reunirnos. Nos capacitamos. Y un 7 de diciembre se fundó la cooperativa”.

Ha pasado casi un año y el levantamiento de las viviendas está en su etapa final. Para ello, toda su familia ha apoyado en el trabajo. Cuatro de sus siete hijos ayudan económicamente, los otros tres aportan su fuerza de trabajo.

Como le ocurre a la gran mayoría de los beneficiados, el único apoyo que había recibido para intentar resolver sus problemas habitacionales lo encontró dentro de su familia; afuera: la indiferencia o las dificultades. “Siempre hemos estado alquilando

o posando. No había intentado sacar ningún crédito ni nada de eso, era muy difícil”, expresa.

Teofila Galindo ya tiene cayos de constructora en sus manos. Su primera experiencia solidaria fue en la construcción del Centro Comunal (ahora bodega), donde recuerda que fue ahí donde aprendió a hacer la mezcla, a sisar, y a ligar. En fin, lo dice con sus propias palabras, “fue ahí donde aprendí de qué se trata la construcción”.

La autoconstrucción tiene como desafío principal el tiempo que se destina a la construcción. Muchas veces los socios, beneficiados, no tienen el suficiente tiempo para agilizar la obra como quisieran. En un principio, el proyecto de vivienda Casa de Oro contaba con muchas incertidumbres, pero con la ayuda de las instituciones involucradas, las 40 casas están a un paso de terminarse; Teófila Galindo recuerda aquellos momentos de duda o vacilación: “me sentía muy triste cuando no iniciábamos nada, pensé que sería otro sueño, pero de reuniones en reuniones comenzó la obra y ahora ya estamos por terminarla”.

Esta beneficiada mantiene una visión positiva hacia el futuro, “yo creo que mis hijos tendrán estas oportunidades, y más todavía...a mis hijas yo les hablo de la segunda etapa del proyecto”.

La segunda etapa del proyecto pretende ser la Cooperativa Casa de Oro N° 2; esta etapa procurará ampliar la cantidad de socios con la construcción de nuevas obras habitacionales. Toda una experiencia en proceso de repetirse.

“De reuniones en reuniones comenzó la obra y ahora ya estamos por terminarla”



En 35mts² no caben los sueños

En diciembre de 2003 se formó oficialmente la cooperativa de Casa de Oro. Todo empezó con una serie de conversaciones, sus fundadores recuerdan que entre todos juntaban 50 o 100 lempiras para pagar la renta de los locales en donde se reunían; y si no se juntaba el monto, la casa de uno de ellos servía como espacio para la organización. Meses después, ya formada la cooperativa, sus fundadores, en su mayoría mujeres, construyeron con sus propias manos un espacio para sus reuniones, y en el presente, con el proyecto de construcción de viviendas, este espacio sirve como bodega de los materiales de construcción.

La encargada de la bodega es Ernestina Banegas; ella fue una de las personas que fundaron esta cooperativa; y ahora su labor es la de mantener los materiales de construcción en orden. Ella vela por los intereses del resto. Un clavo que se pierda ya sería un faltante, no sólo material sino ético.

Y es que las obras las hacen en conjunto y por eso pertenecen a todos y todas. La construcción del Centro Comunal (bodega) se dio con la ayuda económica del Centro Cooperativo Sueco; y ese dinero lo cuidaron con mucho celo para no defraudar a nadie.

Al igual que todos los socios de la cooperativa, Ernestina Banegas siempre ha tenido problemas con la vivienda, “ahorita vivo con mis cuatro hijas, alquilamos una casa; nunca he vivido en un lugar propio, siempre he alquilado; esta casa en la que vivo ahora tiene dos dormitorios y una sala comedor”, explica Ernestina, quien en un pizarrón apunta cada recibo y salida de los materiales.

Para tener una idea de la casa en donde vive actualmente Ernestina Banegas, basta saber que es menor a 35mts²., “Esta que estamos construyendo es más grande, hay más espacio”, aclara, con satisfacción.

Vivir en un espacio tan reducido, durante tantos años, deja huellas. No se trata únicamente de hacinamiento; es una sensación de exclusión, de una especie de privación de la libertad.

Esta madre soltera, quien a su vez trabaja como cocinera, recuerda con gracia como fue la formación de la cooperativa: “primero nos reunimos con un señor y nos llamaron a reuniones y nos decían que íbamos a obtener una casa por 50 centavos, pues 50 centavos valía la hoja que íbamos a llenar. Y no me lo creía”.

Ernestina Banegas, como muchas otras mujeres más, empezó trabajando como ayudante de albañil en la construcción, pero a raíz de una operación médica, actualmente se le hace imposible mantener un trabajo físico; no obstante, sus dos hijas menores ayudan en la construcción, “ellas ayudan a cortar y armar el hierro”.

Como su familia hay muchas en la cooperativa, “acá la mayoría somos mujeres, los fundadores éramos casi todas mujeres, hay muchas madres solteras también, pero todas trabajamos, hacemos de todo, como trabajamos por ayuda mutua, eso facilita bastante”.

Para Ernestina, su casa es más que una casa. Ya salió de los 35 metros cuadrados y lo que puede venir a futuro es el horizonte.



Los sueños deben tener techo.

Juan Antonio Galindo:

“Ahorita estamos viviendo en la casa de una tía, ahí vivimos todos, mis cuatro hijos y mi esposa”

En la Cooperativa Casa de Oro son 40 los socios. Son 40 casas las que se están construyendo, para 40 familias. Una de estas familias beneficiadas es la de Juan Antonio Galindo.

Padre de cuatro hijos, junto a su esposa -quien es la socia de la cooperativa- Galindo relata cómo se las han tenido que arreglar para encontrar un lugar donde vivir junto a su familia, “ahorita estamos viviendo en la casa de una tía, ahí vivimos todos, mis cuatro hijos y mi esposa”. La casa donde vive actualmente consta de un dormitorio, una sala y una cocina.

La necesidad de construir siempre ha estado presente en la familia Galindo, pero afirma que la débil capacidad de ahorro no lo ha hecho posible, además de que el costo de la construcción siempre va en alza. “Como si fuera poco, los créditos siempre exigen requisitos que uno no tiene”, señala el beneficiado.

Junto a su esposa, quien se dedica al cuidado de los niños, Galindo ha trabajado todo este año en la construcción de las casas del proyecto. Además, trabaja como perito mercantil, ocupación con la cual sostiene la economía de la familia.

Ahora la esperanza de cumplir su meta está cada vez más cerca, a la mano, y en su opinión “lo hace posible la organización y la unión, porque la unión hace la fuerza, en grupo se piensa con mayor motivación y esfuerzo y con mejores ideas”.

Ocupado en la albañilería, Galindo reconoce que “este proyecto es más que levantar cuatro paredes y un techo. Exige trabajar así, en solidaridad, algo que en nuestra cultura no ha sido lo común”.

Sin temor a contestar

-¿Cómo ha sido su experiencia en la construcción de este proyecto?

Una experiencia muy bonita, porque además de adquirir los conocimientos de trabajar en comunidad pues acá se trabaja en equipo, tenemos la motivación de que estamos construyendo nuestra propia casa.

-¿Usted empezó a trabajar sin conocimientos de construcción?

Sí, comencé con pocos conocimientos en la albañilería. Con algunos muy básicos, pero no los suficientes como para construir una casa. El proceso de aprendizaje ha sido largo, pero ahora ya sabemos mejor sobre todo esto.

-Antes de este proyecto, ¿había tenido alguna posibilidad de construir su casa?

Sí, manteníamos la idea, pues uno siempre necesita tener casa propia. Pero a veces los pocos recursos económicos, más que se ha venido encareciendo la construcción, nos ha imposibilitado construir. A veces es bien difícil acumular lo que uno gana para construir una vivienda personal. El pago de materiales, de mano de obra es muy difícil.

-¿Obtener un crédito se le ha hecho imposible?

Sí, porque los intereses son demasiado altos, también exigen requisitos que uno no tiene.



Una cooperativa con manos limpias y futuro claro

El proceso del proyecto de vivienda Casa de Oro está en sus etapas finales. A las casas prácticamente les falta el techo y el piso. Para el ICADE este proyecto se considera “modelo”, por distintas razones, pero resalta la siguiente: es el primer proyecto de vivienda que mantiene tres componentes, el de autogestión, el de autoconstrucción y el de ayuda mutua.

En el de autogestión sobresale una persona, la tesorera de la cooperativa Casa de Oro, María Magdalena Salgado. Ella es la encargada de mantener las cuentas administrativas en orden. Además de ser la tesorera, esta madre soltera es fundadora de la cooperativa.

Actualmente vive con sus tres hijos, su madre y su hermana. Ella también será beneficiada en este proyecto.

En este proyecto habitacional, la autogestión ha sido un éxito. La tesorera encargada de llevar una buena parte de este proceso cree que, “la autogestión a veces ha sido difícil, pues lo que uno no ha hecho antes se hace difícil pero no imposible, y para nuestro desarrollo, nos ha ido muy bien”.

La actual tesorera además de manejar la administración financiera es fundamental dentro de la planificación de la dirección que va tomando la Cooperativa. María Magdalena confía que el proceso de la Cooperativa Casa de Oro no terminará cuando se terminen las casas, esto sigue; pues las viviendas van a necesitar mejoras, “no vamos a querer que quede ahí nomás, el grupo sigue, pues queremos que nuestros hijos se organicen en cooperativas. Pues nosotros vamos avanzando pero ellos van creciendo. Queremos también más miembros en la cooperativa”.

A esto se suma la idea de la segunda etapa de la cooperativa, que en un futuro sería la Cooperativa

Casa de Oro N° 2. Y ella afirma que si en este nuevo proceso ocupan de su apoyo administrativo cumplirá, “y si no soy yo, pues ayudaré a capacitar a esa persona”.

Queremos que nuestros hijos se organicen

-¿Qué tanta importancia tiene la organización dentro de las comunidades?

Aprendemos a trabajar en grupo, para ver un sueño hecho realidad, que iniciamos de cero, y hoy estamos viendo las viviendas ya en su etapa final.

-¿Cuáles fueron las perspectivas que tuvieron al momento de fundar la cooperativa?

Se nos hacía difícil porque no teníamos nada, ni terreno

De largo todo se nos hacía difícil. Pero iniciando es como se ve como será el final. Nosotros iniciamos de cero, luego la alcaldía nos facilitó en la compra del terreno, de ahí nos organizamos mejor al mirar de que había que estar viniendo a trabajar, pues la gente todo lo quiere rápido, no mira las cosas como proceso. Pero como fundadores creemos que todo tiene un tiempo.

-Cuál es la situación dentro de los socios...

Pues acá habemos de todo, algunos tenemos un sueldo base, otros no, pero lo mejor es que tenemos la voluntad de ver que en grupo todo es más fácil. Se trabaja por ayuda mutua, aquí trabajamos todos.

-¿Qué será de la cooperativa ya terminadas estas casas?

-¿Desean seguir teniendo la alianza con ICADE?

Si, nos llevamos muy bien, hemos trabajado bien en conjunto. Ahorita queremos echar adelante la nueva etapa de la cooperativa y esperamos que el ICADE siga presente con nosotros en la Cooperativa Casa de Oro N° 2. Nosotros vamos a tener vivienda, pero hay mucha gente más que también necesitará de la suya.

-¿Qué se plantean con esta nueva cooperativa?

Bueno, ya con nuestros conocimientos pensamos que podemos ayudarle a más personas. Ahorita pensamos en planes, a futuro, y creemos que de estas organizaciones se puede beneficiar a mucha gente más.



“Esto no termina cuando se terminen las casas, esto sigue; pues las viviendas van a necesitar mejoras. No vamos a querer que quede ahí nomás, el grupo sigue”



Un maestro de obra que enseña construyendo

Detrás de cada obra hay una persona que es el enlace entre la arquitecta y los albañiles, entre los planos y la edificación y a su vez intermedio entre los albañiles y la construcción. Todo este trabajo diario recae en el maestro de obra. Desde sus cimientos, hace ya un año, en el proyecto de vivienda de Casa de Oro, Alejandro Gudiel Mejía, fue contratado para este trabajo.

Originario de Danlí, Alejandro (48), comenzó a trabajar en la albañilería desde los 15 años. Menciona como experiencia el periodo del presidente Suazo Córdoba, donde trabajó para el gobierno en construcciones alrededor de todo el país. Luego, en 1999, después del Mitch su caso fue como el de muchos hondureños, ya que se fue a trabajar a los EEUU, donde recuerda haber llegado a ganar 15 dólares la hora.

Alejandro Mejía no es socio de la cooperativa Casa de Oro, pero trabaja gustosamente para ellos, asistiendo los nueve grupos (conformados por un albañil y su ayudante) que se han asignado dentro de la construcción. “A mi me contactaron los de la cooperativa, y desde inicios del año he trabajado en este proyecto, trabajo todo el día, hasta que se va el último”, dice Mejía.

Ha sido el encargado de enseñarles a los beneficiados los principios de la construcción, hasta el punto de afirmar que ya hay muchos de ellos que están capacitados como para trabajar posteriormente en el campo de la albañilería.

Es la primera experiencia que tiene como maestro de obra en un proyecto de autoconstrucción y de ayuda mutua, modalidades de la que dice aprender mucho, afirmando que además de un trabajo, se siente cada día más relacionado con la gente que va a ocupar las viviendas de Casa de Oro.

“Afortunadamente yo tengo casa propia, pero si no tuviera, estas casas serían como un palacio para mi, entiendo el porqué esta gente trabaja con tanto amor y esmero”, afirma Mejía.

-¿Qué tan importante es este proyecto para usted?

Bueno, de esto vivo; y también me siento más relacionado con la gente que va a vivir acá. Tal vez al final de este proyecto, ICADE podría llevarme a trabajar a otro proyecto.

-¿Qué diferencia ve usted en este proyecto con respecto a las demás casas de la zona?

A diferencia de otras, estas construcciones llevan todo lo reglamentario de la construcción. Todo va cabal. En otros proyectos, la gente pobre por ejemplo manda a hacer sus casas y no le pone toda la cantidad de hierro que debe de llevar. Y estas casas todo lo llevan legal.

-La gente que está trabajando en sus casas vino sin conocimiento de construcción...

Si, la gente que llegó vino ignorante en lo que es la construcción; ahora ya no hay ignorantes. Ellos ya saben como se construye. Después de esto, hay muchos que ya tienen la capacidad de trabajar en la construcción si así lo desean.

-¿Cuando la gente construye sus propias casas, lo hacen con otros ánimos?

Si, le ponen más esmero. Cada socio hace el trabajo con voluntad, con gusto, con amor.

-En cuanto al precio de la construcción, ¿cómo lo ve usted?

Bueno, los materiales van subiendo de precio constantemente, pero en este proyecto no se está comprando seguido el material, lo traen de un solo. Y eso ayuda de mucho.

-¿Estos proyectos son un ejemplo dentro de la comunidad?

Si, este es un proyecto que va a motivar a mucha gente, cuando se inició el proyecto hubo socios que se retiraron al ver que esto no avanzaba, pero ahora que ya miran como vamos, ya quieren venir de vuelta a hacer sus proyectos.

Un ladrillo y otro ladrillo, son más que dos

El alma del proyecto de construcción de viviendas que impulsa el ICADE es la alianza entre el trabajo solidario y la ayuda mutua. Entre las propuestas de ayuda mutua destacan las *jornadas de solidaridad*, un intercambio de trabajo voluntario entre pobladores ya anteriormente beneficiados que ayudan a poner al día a los proyectos que tienen algún retraso en la ejecución.

“Estas jornadas las hacemos cuando hay un atraso dentro de la construcción, llevamos un grupo de otro proyecto para que agilicen otro proyecto atrasado, y todo esto bajo una dinámica de solidaridad”, explica Carlos Alberto Turcios, educador del ICADE en los programas de vivienda.

Fue el caso del proyecto de viviendas de Casa de Oro, con pobladores procedentes de Veracruz y Voluntades Unidas (El Progreso, Yoro) quienes viajaron a El Paraíso para darle una mano a los constructores.

“La jornada tuvo un día de duración, tiempo en el cual no sólo se avanzó en lo material sino en la conciencia solidaria”, comentó Carlos.

Hace dos años varios miembros del ICADE viajaron a Uruguay, y fue en ese país sudamericano donde conocieron este modelo de solidaridad. Ya en Honduras, el Centro Cooperativo Sueco ha apoyado

para que el ICADE lo implemente en sus programas de vivienda social.

Además de ser una metodología de construcción, las jornadas de solidaridad se caracterizan por el aprendizaje que deja en las comunidades



en el aspecto organizativo. “Son jornadas donde trabajan hasta los niños, todos se preparan para recibir a los otros compañeros”, señala Turcios.

“Los beneficiados de Casa de Oro fueron apoyados por los de El Progreso, pero es probable que en un futuro, la gente capacitada de Casa de Oro servirá voluntariamente en futuras jornadas de solidaridad a otros proyectos”, opina Carlos Turcios.

No todo es trabajo en esas jornadas. Generalmente terminan con una noche cultural, planificada por los beneficiados a modo de agradecimiento; que a su vez sirven para promover la identidad del país a través de la celebración y el compañerismo.



COHVISOL Y PROVISOL

Cronología Básica de la Incidencia en el 2006

El proceso de **incidencia** – negociación ante el gobierno- a favor del Consejo Hondureño de la Vivienda Solidaria (COHVISOL) y del Programa de Vivienda Solidaria (PROVISOL) fue intenso en el 2006.

Durante ocho meses estas iniciativas ciudadanas chocaron con diversos intereses y conflictos al interior de la burocracia estatal, al grado que para octubre se planeó hacer una gran marcha para exigir no más dilaciones, no más demagogia. La presión permitió concretar algunos acuerdos.

Para dar una idea del trabajo visible (no el de la carpintería organizativa, que es extenso), se presenta la siguiente cronología básica:

1. El 25 de abril se realizó el Tercer Foro de la Vivienda Solidaria con 820 delegados de 17 departamentos del país. En esta oportunidad se le entregó el Programa PROVISOL al Presidente de la República, quien se comprometió en apoyarlo y darle seguimiento.
2. A principios de junio, fue posible integrar una Comisión entre el COHVISOL y la Dirección General de Vivienda y Urbanismo (DGVU), por acuerdo con el Ministro de SOPTRAVI, Ingeniero José Rosario Bonano y el entonces Ministro de Finanzas, Hugo Noé Pino. La misión de la Comisión era consensuar el contenido del Programa y proponerle al Señor Presidente de la República un anteproyecto de decreto para darle vida legal.
3. De 7 reuniones programadas la Comisión realizó únicamente 4, habiendo sido suspendidas 3 por decisión de la Directora de la DGVU, argumentando ocupaciones. La

incomodidad de la Directora de la DGVU surgió cuando el COHVISOL presentó oposición a su pretensión de querer centralizar el Programa a la competencia administrativa de su dependencia.

El COHVISOL sigue sosteniendo que el Programa de Vivienda Solidaria no debe operar de forma centralizada por los riesgos de lentitud burocrática, politización y la propensión de la administración pública a ser afectada por desviaciones que afectan la sana gestión de los procesos.

4. El 14 de julio, se dialogó con el Presidente de Honduras y se logró la suscripción de 6 acuerdos que son una síntesis del contenido del PROVISOL.
5. Reunión con el Ministro de SOPTRAVI, Saro Bonanno, quien asignó al Viceministro, Ing. Ernesto Galeas para continuar con el diálogo. Con el Ing. Galeas se logró un consenso general sobre el PROVISOL. Se integró una Comisión Técnica para que elaborara el anteproyecto de Decreto.
6. El 24 de julio el Señor Presidente de La República, mandó una carta en donde se indicaba que a partir de esa fecha la Comisión Negociadora del Gobierno con el COHVISOL quedaba integrada por el ex Ministro Asesor para la Vivienda, Héctor Briceño, la Ministra Rebeca Santos y, Julio Quintanilla, Gerente de BANHPROVI.

Con esto se estaba separando de las accidentadas negociaciones al Ministro de SOPTRAVI. Esa decisión ocurría en el marco



del conflicto que se mantenía sobre el tema de vivienda entre Bonano y Briceño. Finalmente Briceño salió del gabinete.

7. El 16 de agosto se comenzó el diálogo con la nueva Comisión de Gobierno. El Ministro Briceño recibió a la COHVISOL en las oficinas de BANHPROVI. (La Ministra de Finanzas no se presentó).
8. En BANHPROVI las negociaciones no pasaron de la primera reunión del 16 de agosto.
9. El 29 de agosto el COHVISOL fue convocado a los actos formales de constitución de la Mesa Sectorial de Vivienda.



El Presidente de Honduras durante la inauguración del Tercer Foro Nacional de la Vivienda, que patrocina el Consejo Hondureño de la Vivienda Solidaria (COHVISOL).

El Presidente Manuel Zelaya instruyó hoy al ministro asesor en vivienda, Héctor Briceño, para que a partir de mañana se comience a discutir con las organizaciones del sector popular, los programas de vivienda social que emprenderá su gobierno en beneficio de los más pobres.

26 de abril de 2006



Lecciones prácticas

10 ventajas de los Programas de “Vivienda Social”

Para el ICADE el desafío no se reduce a construir y construir, sino que a construir y reflexionar sobre lo que esa práctica significa como proceso de participación ciudadana y democracia.

El acompañamiento activo de asesores internacionales, como Gustavo González, del Centro Cooperativo Sueco y con amplia experiencia en la construcción de vivienda social en Uruguay y América Latina, permite crear pensamiento progresista alrededor del Consejo Hondureño de la Vivienda Solidaria (COHVISOL).

Para el ICADE el punto es levantar paredes y techos, pero también ideas y propuestas, como las contenidas en las 10 ventajas de los programas de vivienda social que se identifican a continuación:

1. Son programas de crédito masivos para la reconstrucción y mejoramiento del espacio habitable (desde comunidades rurales hasta barrios) que se otorgan a sectores específicos de la ciudadanía después de determinar que la estratificación socioeconómica de la demanda es la que efectivamente necesita de préstamos para mejorar sus condiciones de vivienda.
2. Son programas que favorecen a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sus facilidades de financiamiento y pago responden a otras lógicas que las que impone el sector privado a través de los bancos. Los procesos colectivos y la aplicación de auténticos procesos ciudadanos de democracia son indispensables para su correcto funcionar. Se trabaja con bajos intereses y la dinámica de préstamos y pago está basada en las posibilidades reales de pago del solicitante.
3. Aunque también ha habido malas experiencias a nivel de América Latina, los programas de “vivienda social” no son bonificaciones provisionales que se deban a coyunturas políticas. Están pensados como el inicio de políticas nacionales de vivienda.
4. Los programas tienen una filosofía propia que radica en que el mejoramiento del espacio habitable de las ciudades y los municipios fortalecen la democracia y promueven el desarrollo social.
5. Su aplicación en ciudades latinoamericanas ha evitado explosiones sociales y expresiones de violencia e inconformidad propias del área urbana de los países empobrecidos por el neoliberalismo. Los programas de “vivienda social” ayudan a revertir el inconformismo derivado del hacinamiento, la sobrepoblación, la dispersión urbana, la pobreza y la exclusión.
6. Son programas que marchan por su propia cuenta una vez impulsados, porque se convierten en procesos colectivos y comunales donde los ciudadanos son los actores sociales de su propio cambio.
7. Son un ejercicio de descentralización del Estado.
8. Por su naturaleza, los procesos tienden a favorecer a la colectividad y fortalecer la cultura democrática; el empoderamiento de grupos específicos no es permitido por la colectividad, porque frena la dinámica de los procesos.



9. Son una oportunidad para incluir social y urbanamente a cinturones de miseria que históricamente han sido relegados al abandono.
10. Son una fuente de trabajo que convoca tanto a obreros como a profesionales. Por lo general, las comunidades contratan a personas originarias del lugar porque son éstas las que mejor conocen la situación particular del lugar.



“Para el ICADE el desafío no se reduce a construir y construir, sino que a construir y reflexionar sobre lo que esa práctica significa como proceso de participación ciudadana y democracia”



Quién es quién en el sector público en materia de vivienda

- 1. Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI):** instancia rectora del sector. Es una Secretaría donde la agenda de vivienda, en general, no tiene una atención prioritaria. Se ocupa más de desarrollo vial y de infraestructura (puertos, aeropuertos y transporte). En sus políticas nacionales no tiene una oferta efectiva de vivienda social para los sectores poblacionales de bajos ingresos.
- 2. Consejo Nacional para la Vivienda:** creado en 1990, es una instancia de diálogo, deliberativa, de estructura mixta, pero sin capacidad decisoria. Actualmente está compuesta por representantes del sector público y de la sociedad civil. Fue creado para actuar de foro permanente en cuanto a la política de vivienda, sus sistemas, mecanismos y programas; sin embargo, el Consejo no funciona desde 1993. Tampoco ha actuado como el mecanismo periódico de seguimiento y evaluación en el sector. El Consejo hubiera sido la contraparte más apropiada para ser consultada en el tema de la ERP y habría sido lo más conveniente que operara en la profundización de los procesos de planificación y programación, particularmente en lo referente a mejorar las prioridades y la proyección financiera de los recursos disponibles bajo dicha Estrategia.
- 3. Dirección General de Vivienda y Urbanismo:** instancia administrativa en el sector, encargada de vivienda y desarrollo urbano. Se estableció por el Decreto Ejecutivo No. 16-02, que la faculta como órgano responsable de la “dirección, coordinación y evaluación en la ejecución de los programas y proyectos de vivienda y urbanismo que desarrolló el Gobierno de la República”. Es parte de SOPTRAVI. Desde su creación en 2000, viene fortaleciéndose institucionalmente pero aún no tiene presupuesto de inversión, ni tiene jerarquía en el sector. Tampoco conduce a los grupos decisorios o supervisores de la política. En administración pública, la jerarquía de “Dirección General” es menor que la del Vice-Ministerio. Actualmente la Dirección busca reconocimiento y aceptación en el sector. Su personal tiene la expectativa que si pasa la Ley Marco de Vivienda, propuesta en el Legislativo desde el 2000, la Dirección se convertiría en el ente rector del sector.
- 4. Dirección de Ordenamiento Territorial:** pertenece a la Secretaría de Gobernación y Justicia, y su mandato se deriva de la Ley de Ordenamiento Territorial de 2004. Es responsable de ordenar el territorio, en cuanto al uso del suelo. Ha creado instancias consultivas con la sociedad civil, comités ejecutivos y comisiones técnicas a nivel del Gobierno. De acuerdo a la Ley de Ordenamiento tendría que haber logrado ya mayores resultados de descentralización municipal y de adopción de medidas para uso del suelo en los 298 municipios del país. Pero la realidad es que la gran mayoría de los municipios aún ni entiende o quiere entender la Ley, ni tampoco tienen la capacidad instalada técnica para hacerla efectiva en sus respectivos territorios.
- 5. Instituto de la Propiedad:** creado por Decreto Legislativo en 2004, cambia sustancialmente el Sistema de Registro de la Propiedad, pasándolo del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, y con ello pretende modernizar el sistema, volverlo autofinanciable y permitir la expropiación de los terrenos destinados a vivienda. Muchos de estos terrenos han

quedado históricamente bloqueados para "normalizar su propiedad", por falta de registros confiables. Ya ha arrancado en cuanto al ejercicio de sus funciones, pero hay quejas sobre la celeridad de sus acciones. El reto mayor lo enfrenta actualmente el Instituto en las áreas marginadas urbanas y periurbanas, en particular de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

6. **Fondo Nacional para la Producción y la Vivienda (FONAPROVI):**, maneja recursos financieros de segundo piso para transacciones hipotecarias, para que los interesados a todos los niveles de ingresos puedan adquirir o mejorar su vivienda, por préstamos recibidos a través de los bancos. Menos de la mitad de estos préstamos está destinada a vivienda social. Como institución de segundo piso, llena un vacío en el país, que es fomento de la producción nacional, y como segunda prioridad, vivienda. Se sabe que el 40% del total de su cartera esta destinada a financiamientos para la vivienda.

7. **Régimen de Aportaciones Privadas (RAP):** al cual contribuyen por Ley, los trabajadores del sector privado, aportando obligatoriamente un porcentaje igual que su empleador, 1.5% cada uno. Por este mecanismos han generado un fondo sustancial, de crecimiento constante. Obtiene fondos a bajísimo costo. Todo afiliado al Régimen recibe el 3% de interés por los fondos ahorrados, una tasa menor que el índice inflacionario. Canaliza sus fondos a través del

sistema financiero nacional, empresas contribuyentes y bancos asociados. Es la única fuente en Honduras con recursos de segundo piso, dirigidos a la vivienda de interés social y de bajo costo, tanto en construcción de nuevas unidades y mejoramiento de las existentes. En los últimos 3 años la actividad crediticia del RAP ha estado mayormente destinada a atender las necesidades habitacionales de los hogares con mayores ingresos. También, en los últimos tres años, no ha cubierto las metas propuestas en vivienda social.

8. **Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural (FUNDEVI):** Desde



el año 2000 ofrece subsidios en operaciones recuperables para la construcción y mejoramiento de vivienda de bajo costo, con garantía hipotecaria y solidaria. Esta última garantía es de distinción significativa para la Fundación. Su acción conjunta,

de varios actores, es un ejemplo atractivo de alianzas y cooperación. Involucra el Gobierno de Honduras, países donantes (Alemania y Suecia) y socios multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo/BID). A pesar de sus logros, comienza a vislumbrarse un serio problema en materia de recuperación de cartera, el que, de no tratarse con antelación y en forma seria, podría distorsionar negativamente el comportamiento altamente favorable, que hasta este momento, ha tenido el desempeño de FUNDEVI.



Los institutos de previsión y otras rutas de financiamiento

Cabe mencionar que los **institutos de previsión social** otorgan financiamiento hipotecario a los afiliados -especialmente INPREMA e INJUPEMP- tienen los programas más visibles de vivienda. Proporcionan préstamos a sus afiliados, dando en garantía sus ahorros a tasas de interés más bajas que las vigentes en el mercado. Hasta el pasado reciente, 4 años atrás, todavía los recursos de estos fondos eran utilizados para financiar directa o indirectamente proyectos de vivienda, en promedio de 200 a 300 unidades por proyecto, y siempre ubicados en zonas urbanas. Pero una vez las unidades construidas entraban en el mercado, la gran mayoría de los contribuyentes a estos fondos no calificaba por tener ingresos familiares por debajo de los requeridos. Y en consecuencia, sus beneficiarios finales eran familias en que ningún miembro estaba afiliado a dichos sistemas.



Actualmente, la mayoría de los préstamos concedidos son de tipo personal y su destino no es para vivienda, sino para gastos de consumo. Los fondos destinados a préstamos hipotecarios, generalmente no cumplen sus metas porque entre los afiliados no hay suficientes casos que satisfagan los requisitos exigidos, entre ellos, el total de ingreso familiar.

En los últimos 4 años, los **bancos privados** han abierto considerablemente la disponibilidad de fondos para vivienda, incluso en dólares, con intereses bajos.

Por su forma de operar, en cuanto a riesgos y rentabilidad, no tienen ofertas para la vivienda social, de bajo costo, ni aún para la subsidiada.

Cabe destacar que las **cooperativas de ahorro y préstamo** que otorgan créditos hipotecarios son muy pocas. Igual que a los bancos les interesa más el préstamo destinado al consumo que a vivienda o producción.

Finalmente, son pocas las ONG que han evolucionado a **OPDFs**, y que por lo tanto, financian programas de vivienda. Como las ofertas gubernamentales de fondos están condicionadas por regulaciones muy estrictas, propias de la banca privada, muchas ONG del sector social no han podido calificar para las líneas de crédito que ahora ofrece BANPROVI, y que antes ofrecía FONAPROVI.

En los años 80 y 90, AID, el Gobierno de Honduras y otros financieros internacionales ofrecieron financiamiento para la construcción y mejoramiento de vivienda. A medida que las regulaciones del Gobierno y de los intermediarios formales se volvieron más estrictas, muchas OPDF que inicialmente estuvieron involucradas, se retiraron o quedaron descalificadas. Este proceso “de depuración” dejó comprobado que las entidades del sector de economía social, de hecho muchas ONG con “experiencias de crédito social”, no pueden cumplir las condiciones, primordialmente bancarias, que le exige la Comisión Nacional de Bancos y Seguro para mantenerse como prestamistas en vivienda.

La demanda ciudadana

Menos promesas oficiales y más techos

En Honduras no hay una política pública definida que se concentre en promover programas y procesos de “vivienda social”. Hace falta una política nacional incluyente, estratégica, socializada, pública, que asuma los desafíos habitacionales de la cada vez más empobrecida población hondureña y que les permita a las propias comunidades y barrios afrontar sus problemas habitacionales.

Ha habido promesas, programas que se abren y cierran con los gobiernos de turno, sin embargo, el derecho primario de vivir dentro de un espacio digno y habitable es desconocido por la mayoría de ciudadanos que necesitan facilidades para construir una

casa o al menos modificar la propia a fin de hacerla digna y segura. Coyunturalmente, en este momento Honduras se encuentra en el momento justo para que se defina una política nacional de vivienda o al menos para que se promuevan proyectos de “vivienda social” que ayuden a la población a hacer frente a la pobreza, e invertir mejor los ingresos que se perciben gracias a las remesas.

Con perspectiva a futuro, los proyectos de “vivienda social” son una oportunidad para concretar una

economía más sólida, más social y menos dependiente de la inmigración y el sector “informal” de la economía.

En Honduras en la actualidad los programas de carácter social desde el Estado son muy escasos y hasta el momento el gobierno no ha visto en las precarias condiciones de las viviendas en las que

viven los ciudadanos, un factor generador que desencadena (o desencadenará) y empeora (y empeorará) la crisis de salud, de educación, de violencia, de seguridad y de enfermedades mentales en la población hondureña.

Si el costo de tener ciudades sin planificación urbana, verda-

dero ordenamiento territorial y normativa a favor del espacio habitable es altísimo, en el futuro la situación amenaza ser mucho peor.

El gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales tiene la oportunidad de evitar que en un futuro cada vez más próximo, ciudades como Tegucigalpa, La Ceiba, Choloma, San Pedro Sula, Choluteca y Santa Rosa de Copán, entre otras, se conviertan en gigantescos circuitos de violencia social y de crimen organizado.





Hasta ahora, el tema de la vivienda y el mejoramiento urbano ha sido concebido como exclusivo del sector privado, en un mercado donde los costos no se corresponden con los beneficios.

Para las capas medias de la sociedad, lo disponible son viviendas caras en colonias que se levantan de la noche a la mañana y en las cuales el hacinamiento apenas se disimula por la pintura de las paredes.

Con hacer unos cuantos números cualquiera puede comprobar que los compradores terminan pagando millones de lempiras por casas que no los valen.



Mientras tanto, los sectores más pobres simplemente no califican para esas colonias por lo que el único financiamiento disponible es el que reciben vía remesas, cuando alguno de sus familiares logró completar el sacrificio de migrar a Estados Unidos.

como la alimentación, la educación, la salud, el transporte, la seguridad, la información. Está comprobado que si no hay condiciones buenas de vivienda los escenarios donde se ejercen otros derechos prácticamente están anulados.

En el país no hay procesos colectivos y ciudadanos de gran escala que se hayan propuesto para combatir las precarias condiciones de los sin casas. Y aunque el crecimiento urbano no se frena, no se conoce que existan procesos de reordenamiento barrial - que ayudarían a crear mayores condiciones de seguridad.

El tema es de los más sentidos por la población, pero no tiene el eco de otras problemáticas, como la seguridad ciudadana o los combustibles, y la mayor parte de la población que necesita de la ayuda del Estado para atender su crisis habitacional desconoce que existen instituciones facultadas para tratar su problema.

Cada vez son más las ciudades que superan los diez mil habitantes de población, y vendría bien pensar que el espacio habitable determina si se inicia o se trunca el desarrollo del colectivo que lo habita. El derecho a una vivienda digna es de orden primario e influye directa e indirectamente en otros derechos,

La buena noticia es que hay sectores de la sociedad civil que han visibilizado la dimensión real de la crisis habitacional y están trabajando para darle forma y proyección a la demanda social. Esa es la razón de ser de COHVISOL y PROVISOL.

COHVISOL le toma la palabra Sr. Presidente

Tegucigalpa - El presidente hondureño, Manuel Zelaya Rosales no será "borrego" de nadie y mucho menos de grupos poderosos que hacen sus negocios y operan en el país, según sus propias expresiones, vertidas en el marco del III Foro Nacional de la Vivienda Solidaria.

26 de abril de 2006





El Heraldito

Buscan reformular política de vivienda

San Pedro Sula. Con el propósito de establecer una estructura para formular políticas habitacionales que favorezcan a los sectores populares y medios de la población, se desarrolló ayer el primer foro regional sobre la vivienda.

En el evento se efectuaron diferentes exposiciones y debates referentes a la problemática de la vivienda de nuestro país, en la que participaron representantes de la sociedad civil, gremios, sindicatos, patronatos y agencias de cooperación internacional, que

analizaron el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde se establece que la población empobrecida es víctima de la exclusión de los sistemas de vivienda, sean impulsados por el Estado o el sector privado.

“Lo que pretendemos es crear un consejo nacional y uno regional para gestionar y promocionar políticas y programas de viviendas que beneficien a las familias de escasos recursos, y que éstos programas sean impulsados a través de los gobiernos municipales”, dijo Alberto Benítez, representante de Hábitat para la Humanidad.

Además, se busca que esa estructura organizativa forme parte del Consejo Nacional para la Vivienda Solidaria, a constituirse el próximo año.



EXPOSICIÓN. Los organizadores expusieron sobre la problemática de la vivienda en el país.

Tomado de diario El Heraldito
12 de noviembre de 2005



TIEMPO
EL DIARIO QUE SE LEE PRIMERO

Promueven en La Ceiba programa Vivienda Solidaria

LA CEIBA. Con una importante reunión en el salón de sesiones de la municipalidad de esta ciudad, diferentes sectores de la sociedad se dieron cita para conocer el proyecto Vivienda Solidaria que promueve el Consejo Hondureño de la Vivienda, regional La Ceiba, y que cuenta con el visto bueno del presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales.

La exposición del proyecto estuvo a cargo de la coordinadora regional Belinda Rodríguez, y del dirigente social Oquellí Flores, quien es subcoordinador de este ambicioso programa de casas para la gente pobre.

También se contó con la presencia del señor Pablo Alvarez, coordinador del Consejo Nacional de Pobladores de Honduras y representante de la Vivienda Solidaria a nivel central, quienes explicaron a los presentes de las colonias y aldeas aledañas que es un proyecto grande y que va a ser una realidad.

Los fondos para ayudar a las personas a tener una vivienda digna provienen de los recursos destinados para la erradicación de la pobreza, además dieron a conocer que el único requisito es demostrar que no tienen casa y las personas que tienen su solar también pueden aplicar para la construcción de su vivienda, todo esto con cuotas mensuales bajas para la gente pobre.

Evaluación, Presidente Zelaya:

La tónica de los gobiernos ha sido no hacer nada

Sólo se pone de acuerdo con dos poderosos medios de comunicación, sostuvo

TEGUCIGALPA. La tónica es que los gobiernos no hagan nada, y no hacer nada significa ponerse de acuerdo con dos poderosos medios de comunicación y no hacer nada, dijo el viernes el presidente Manuel Zelaya Rosales, durante el lanzamiento del plan gubernamental de vivienda popular y al referirse a sus primeros 100 días de gobierno.

"Vamos a vencer los obstáculos que impiden que los hondureños accedan a una vida digna; sé que la tónica ha sido que los gobiernos no hagan nada, y no hacer nada es ponerse de acuerdo con dos poderosos medios de comunicación y que nadie diga nada y eso ha sido la tradición", dijo el presidente Zelaya Rosales.

Expresó que su gobierno "está tratando de hacer algo y tocando intereses específicos, empezamos con un programa de energía y claro, hay que tocar intereses comerciales y económicos; empezamos con un programa de reforestación donde tocamos intereses también comerciales y económicos".

Posteriormente en una conferencia de prensa manifestó que "no me dejo manipular ni influir por intereses que no sean los intereses sociales del país". **Tomado de diario Tiempo, 8 de mayo de 2006**

REVISTAZO
com

La verdad al descubierto

Agremiados de la APH podrán tener acceso a una vivienda digna

Por: Erika Elvir

Sin importar el monto de sus salarios, los miembros de la Asociación de Prensa Hondureña, APH, podrán tener acceso a un proyecto de vivienda que dio a conocer el Consejo Hondureño de la Vivienda Solidaria (COHVISOL) ante este gremio.

Tegucigalpa.-La noticia la dio a conocer Luís Enrique Trundle, Director del Programa de Vivienda de ICADE, quien en sus declaraciones manifestó que la APH es uno de los grupos potenciales para participar en este programa, pues aparte de ser uno de los más organizados, contribuirá a divulgar los beneficios que tendrán las personas que opten al proyecto habitacional.

“Con la experiencia que tengo de trabajo en cuestión de vivienda les puedo decir que el Estado siempre ha destinado fondos para la construcción de viviendas pero estos han sido mal orientados, ya que los dineros los han colocado en los bancos comerciales y es así que las personas más pobres no han tenido opción de compra” aseguró Trundle.

Trundle aseveró que este es un programa para personas de escasos recursos económicos y que se crea precisamente ante el déficit habitacional que enfrenta Honduras, pues en el país, la vivienda solo es accesible a la clase alta y en un menor porcentaje a la clase media.

Agregó que el programa surge de la lucha de las organizaciones, con lo que se crea el Programa de Vivienda y Crédito Solidario (PROVICCSOL) y que la APH y sus agremiados a nivel nacional, serán beneficiados con una vivienda digna.

La lucha ahora se enfocará para que el PROVICCOSOL sea una realidad. El funcionario expresó que “hay que aclarar que ni la COVIHSOL ni el ICADE manejan fondos pues el logro más grande de estas organizaciones es la aprobación del decreto ya que los 800 millones de lempiras que ha destinado el gobierno los manejarán las cooperativas de viviendas”.

El COVISOL trabaja a la par de ICADE. La primera aglutina a más de 800 organizaciones a nivel nacional. Está conformado por diversos sectores debido a que la problemática de la vivienda es un problema de genera mucha preocupación en todo el país.

Una de las propuestas que surge es que la APH sirva de garante a los afiliados que quieran obtener una vivienda, mediante un convenio entre esta organización y el PROVICCOSOL. Los trámites se canalizarían por medio de ambas organizaciones.

La APH cuenta con afiliados que desempeñan trabajos informales, entre estos se incluyen a locutores que trabajan en las zonas rurales del país, ganando salarios menores a los cinco mil lempiras, no obstante este ya no será un problema pues estas personas podrán optar a una vivienda sin importar el monto de salario mensual.

“Una de de las cosas que hay que dejar claro es que los hondureños antes no podíamos soñar y ahora sí, saber que podemos tener una casa. La lucha que nos queda es que los empresarios se toquen la conciencia y no hagan más incremento a los materiales de construcción como en este momento el aumento al cemento, concluyó Trundle. **Tomado de Revistazo.com, 1 de diciembre de 2006**

ÉSTA ES MI CASA



MARIO BENEDETTI

*No cabe duda. Ésta es mi casa
aquí sucedo, aquí
me engaño inmensamente.*

Ésta es mi casa detenida en el tiempo.

*Llega el otoño y me defiende,
la primavera y me condena.
Tengo millones de huéspedes
que ríen y comen,
copulan y duermen,
juegan y piensan,
millones de huéspedes que se aburren
y tienen pesadillas y ataques de nervios.*

*No cabe duda. Ésta es mi casa.
Todos los perros y campanarios
pasan frente a ella.*

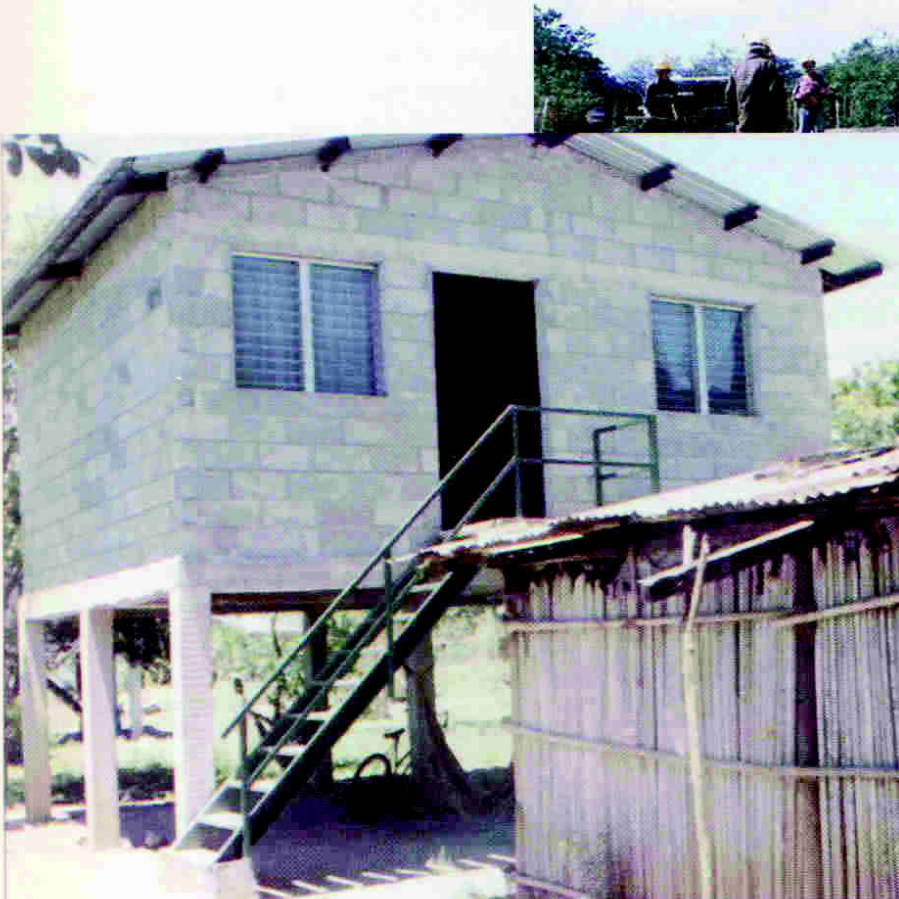
*Pero a mi casa la azotan los rayos
y un día se va a partir en dos.*

*Y yo no sabré dónde guarecerme
porque todas las puertas dan afuera del mundo.*





El día a día del hondureño promedio es convivir con enfermedades endémicas relacionadas directamente con la carencia de una vivienda digna, ya que la mayoría de los asentamientos humanos carecen del drenaje de aguas residuales, agua potable y calles pavimentadas.



El ICADE demuestra que si es posible construir viviendas dignas para los pobres, con la participación protagónica de los pobres, los gobiernos locales, el gobierno central y la cooperación internacional. Lo que estamos construyendo no son únicamente viviendas, sino una política pública distinta, con una visión participativa y democrática.